

Sr. Secretario. — Se necesita la resolución de la Cámara.

Sr. Cambaceres. — El apoyo de dos senadores y la votación.

Sr. Juárez Celman — Creía que el reglamento establecía que bastaba la indicación de un senador.

—Se vota si se aprueba en general el dictamen de la Comisión y resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 1º.

Sr. Gómez. — Yo desearía saber del miembro informante por qué tiene pensión graciable la viuda del teniente coronel Gómez. ¿No la tiene por la ley?

Sr. Cambaceres. — Era teniente coronel de guardias nacionales.

—Se vota si se aprueba el artículo 1º y resulta afirmativa, lo mismo que el 2º sin observación.

—El artículo 3º es de forma.

10

Sr. Presidente. — Se va a pasar a considerar el proyecto sobre educación común.

Está en discusión el despacho de la Comisión de Legislación.

—Se lee:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación, ha estudiado el proyecto sobre educación común, sancionado por la Cámara de Diputados; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja en mayoría, que lo aprobéis, sin modificación alguna.

Sala de comisiones, Buenos Aires, Agosto 22 de 1883.

José R. Baltoré. — Rafael Cortés.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación, en minoría, ha tomado en consideración el proyecto de ley sobre educación, enviado por la Honorable Cámara de Diputados; y, por las razones que expone oportunamente, os aconseja la insistencia en vuestra sanción del 8 de Octubre de 1881,

desechando por consiguiente las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Sala de comisiones, Buenos Aires, Agosto 23 de 1883.

Miguel M. Nougués.

Proyecto de la Cámara de Diputados

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Principios generales sobre la enseñanza pública de las escuelas primarias

Artículo 1º — La escuela primaria tiene por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de seis a catorce años de edad.

Art. 2º — La instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene.

Art. 3º — La obligación escolar comprende a todos los padres, tutores o encargados de los niños dentro de la edad escolar establecida en el artículo 1º.

Art. 4º — La obligación escolar puede cumplirse en las escuelas públicas, en las escuelas particulares o en el hogar de los niños; puede comprobarse por medio de certificados y examen, y exigir su observancia por medio de amonestaciones y multas progresivas, sin perjuicio de emplear, en caso extremo, la fuerza pública para conducir los niños a la escuela.

Art. 5º — La obligación escolar supone la existencia de la escuela pública gratuita al alcance de los niños de edad escolar. Con tal objeto, cada vecindario de mil a quinientos habitantes en las ciudades, o trescientos a quinientos habitantes en las colonias o territorios nacionales, constituirá un distrito escolar, con derecho por lo menos a una escuela pública, donde se dé en toda su extensión la enseñanza primaria que establece esta ley.

Art. 6º — El mínimo de instrucción obligatoria comprende las siguientes materias: lectura y escritura; aritmética (las cuatro primeras reglas de los números enteros, y el conocimiento del sistema métrico decimal y la ley nacional de monedas, pesas y medidas); geografía particular de la República y nociones de geografía universal, historia particular de la República y

nociones de historia general; idioma nacional; moral y urbanidad; nociones de higiene; nociones de ciencias matemáticas, físicas y naturales; nociones de dibujo y música vocal; gimnástica, y conocimiento de la Constitución nacional.

Para las niñas será obligatorio además el conocimientos de labores de mano y nociones de economía doméstica.

Para los varones el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillos; y en las campañas, nociones de agricultura y ganadería.

Art. 7º — En las escuelas públicas se enseñarán todas las materias que comprende el mínimo de instrucción obligatoria, desarrollándolas convenientemente según las necesidades del país y capacidad de los edificios escolares.

Art. 8º — La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de las horas de clase.

Art. 9º — La enseñanza primaria se dividirá en seis o más agrupaciones graduales, y será dada sin alteración de grados en escuelas infantiles, elementales y superiores, dentro del mismo establecimiento o separadamente.

Art. 10. — La enseñanza primaria para los niños de seis a diez años de edad, se dará preferentemente en clases mixtas bajo la dirección exclusiva de maestras autorizadas.

Art. 11. — Además de las escuelas comunes mencionadas, se establecerán las siguientes escuelas especiales de enseñanza primaria:

Uno o más jardines de infantes en las ciudades, donde sea posible dotarlos suficientemente.

Escuelas para adultos en los cuarteles, guarniciones, buques de guerra, cárceles, fábricas y otros establecimientos donde pueda encontrarse ordinariamente reunido un número cuando menos de cuarenta adultos ineducados.

Escuelas ambulantes en las campañas, donde por hallarse muy diseminada la población no fuese posible establecer con ventaja escuelas fijas.

Art. 12. — El mínimo de enseñanza para las escuelas ambulantes y de adultos, comprenderá estos ramos: lectura, escritura, aritmética (las cuatro primeras reglas y el sistema métrico decimal), moral y urbanidad, nociones de idioma nacional, de geografía nacional y de historia nacional, explicación de la Constitución nacional y enseñanza de los objetos más comunes que se relacionan con la industria habitual de los alumnos de la escuela.

Art. 13. — En toda construcción de edificios escolares y de su mobiliario y de útiles de en-

señanza, deben consultarse las prescripciones de la higiene.

Es además obligatorio para las escuelas la inspección médica e higiénica y la vacunación y revacunación de los niños, en períodos determinados.

Art. 14. — Las clases diarias de las escuelas públicas serán alternadas con intervalos de descanso, ejercicio físico y canto.

CAPÍTULO II

Matrícula escolar, registro de asistencia, estadística de las escuelas y censo de la población escolar.

Art. 15. — Anualmente se abrirá en cada distrito escolar un libro de matrícula destinado a inscribir el nombre, edad, sexo, comunión de sus padres, domicilio, y demás indicaciones necesarias acerca de cada niño en edad escolar existente en el distrito.

Art. 16. — El certificado de matrícula será expedido por la comisión escolar del distrito, en el tiempo, lugar y forma que determine el reglamento de las escuelas, y presentado por el niño al tiempo de ingresar anualmente en la escuela o cuando le fuere exigido por la autoridad escolar del distrito.

Art. 17. — Los padres, tutores o encargados de los niños que no cumplieren con el deber de matricularlos anualmente, incurrirán por primera vez en el mínimo de la pena que establece el artículo 43, inciso 8º, aumentándose ésta sucesivamente en caso de reincidencia.

Art. 18. — Los directores de escuelas públicas que recibiesen en ellas niños que no se hubiesen matriculado ese año, incurrirán por cada omisión en la multa de 4 pesos moneda nacional.

Art. 19. — En cada escuela pública se abrirá anualmente, bajo la vigilancia inmediata de su director, un registro de asistencia escolar que contendrá las indicaciones necesarias sobre cada alumno en lo relativo al tiempo que concurra o que esté ausente de la escuela.

Art. 20. — La falta inmotivada de un niño a la escuela, constante del registro de asistencia, por más de dos días será comunicada a la persona encargada del niño para que explique la falta. Si ésta no fuera satisfactoriamente explicada continuando la falta, el encargado del niño incurrirá en el mínimo de la pena pecuniaria establecida en el artículo 43, inciso 8º, aumentándose en caso de reincidencia hasta el máximo, sin perjuicio de hacer efectiva la asistencia del niño a la escuela.

Art. 21. — En cada escuela pública se abrirá también cada año un libro de estadística de la escuela, destinado a consignar, con relación a ésta, las condiciones del edificio, monto del alquiler, reparaciones que necesita; inventario y estado de los muebles, libros y útiles de la escuela; y con relación a cada niño, el grado de su clase, aprovechamiento, conducta, etcétera. La falta a cualquiera de estos deberes será penada con el mínimo de la multa que establece el artículo 43, inciso 8º, por la primera vez, aumentándose en caso de reincidencia.

Art. 22. — Las penas pecuniarias establecidas en los artículos anteriores, se harán efectivas contra los maestros, por la autoridad escolar respectiva; y contra los particulares por vía de apremio, ante el juez respectivo del demandado, sirviendo de título el certificado del director o comisión de distrito, de no haberse cumplido la prescripción legal.

Art. 23. — El censo de la población escolar se practicará simultáneamente, cada dos años por lo menos, en todos los diversos distritos escolares, en la forma y por los medios que se creyesen más adecuados para obtener la exactitud posible.

CAPÍTULO III

Personal docente

Art. 24. — Nadie puede ser director, subdirector o ayudante de una escuela pública, sin justificar previamente su capacidad técnica, moral y física para la enseñanza en el primer caso, con diplomas o certificados expedidos por autoridad escolar competente del país; en el segundo, con testimonios que abonen su conducta; en el tercero, con un informe facultativo que acredite no tener el candidato enfermedad orgánica o contagiosa, capaz de inhabilitarlo para el magisterio.

Art. 25. — Los diplomas de maestros de la enseñanza primaria, en cualquiera de sus grados, serán expedidos por las escuelas normales de la Nación o de las provincias. Los maestros extranjeros no podrán ser empleados en las escuelas públicas de enseñanza primaria sin haber revahado sus títulos ante una autoridad escolar de la Nación y conocer su idioma.

Art. 26. — Mientras no exista en el país suficiente número de maestros con diploma para la enseñanza en las escuelas públicas y demás empleos que por esta ley requieren dicho título, la dirección general de las escuelas proveerá a la necesidad mencionada, autorizando a particulares para el ejercicio de aquellos cargos, pre-

vio examen y demás requisitos exigidos por el artículo 24.

Art. 27. — Los maestros encargados de la enseñanza en las escuelas públicas, están especialmente obligados:

- 1º A dar cumplimiento a la presente ley y a los programas y reglamentos que dicte para las escuelas la autoridad superior de las mismas;
- 2º A dirigir personalmente la enseñanza de los niños que están a su cargo;
- 3º A concurrir a las conferencias pedagógicas que para el progreso del magisterio establezca la Dirección General de Escuelas;
- 4º A llevar en debida forma los registros de asistencia, estadística e inventario que prescriben los artículos 19 y 21.

Art. 28. — Es prohibido a los directores, subdirectores o ayudantes de las escuelas públicas:

- 1º Recibir emolumento alguno de los padres, tutores o encargados de los niños que concurren a sus escuelas;
- 2º Ejercer dentro de la escuela o fuera de ella cualquier oficio, profesión o comercio que inhabilite para cumplir asidua e imparcialmente las obligaciones del magisterio;
- 3º Imponer a los alumnos castigos corporales o afrentosos;
- 4º Acordar a los alumnos premios o recompensas especiales, no autorizados de antemano por el reglamento de las escuelas para casos determinados.

Art. 29. — Toda infracción a cualquiera de las anteriores prescripciones será penada, según los casos, con reprensión, multa, suspensión temporal o destitución, con arreglo a las disposiciones que de antemano establecerá el reglamento de las escuelas.

Art. 30. — Los maestros ocupados en la enseñanza de las escuelas públicas, tendrán derecho a que no sea disminuída la dotación de que gozan según su empleo, mientras conserven su buena conducta y demás aptitudes para el cargo, salvo el caso de que la disminución fuese sancionada por la ley como medida general para los empleados del ramo.

El reglamento de las escuelas determinará, en previsión del caso, los hechos y circunstancias que importen para el maestro la pérdida de sus aptitudes, por abandono, vicios, enfermedad, etcétera.

Art. 31. — Los preceptores y subpreceptores que después de diez años de servicios consecutivos se viesen en la imposibilidad de continuar ejerciendo sus funciones por enfermedad, gozarán de una pensión vitalicia igual a la mitad del sueldo que perciban; si los servicios hubiesen alcanzado a quince años, tendrán de pensión tres cuartas partes de su sueldo.

Pasando de 20 años, el preceptor o subpreceptor que quisiese retirarse por cualquier causa, tendrá derecho al sueldo íntegro como pensión de retiro.

Art. 32. — Estas pensiones serán pagadas de las rentas del fondo escolar de pensiones, el cual será formado con las sumas que la Nación, los particulares o las asociaciones destinen a ese objeto, y con el 2 % del sueldo que corresponda a los preceptores y a los subpreceptores, que será descontado mensualmente.

Art. 33. — El fondo escolar de pensiones de que habla el artículo anterior, será administrado separadamente del tesoro común de las escuelas, por la dirección general.

Art. 34. — Estas pensiones no podrán ser acordadas antes de dos años de dictada esta ley.

CAPÍTULO IV

Inspección técnica y administrativa de las escuelas

Art. 35. — Las escuelas primarias de cada distrito escolar, serán inspeccionadas dos veces por lo menos en el año, por inspectores maestros. Créase con tal objeto el cargo de inspector de escuelas primarias, que será desempeñado por maestros o maestras normales, en la forma que determine la autoridad escolar respectiva.

Art. 36. — Corresponde a los inspectores de escuelas primarias:

- 1º Vigilar personalmente la enseñanza de las escuelas a fin de que sea dada con arreglo a las disposiciones de esta ley y a los reglamentos, programas y métodos establecidos por la Dirección General de Escuelas;
- 2º Corregir los errores introducidos en la enseñanza;
- 3º Comprobar la fiel adopción de textos, formularios y sistemas de registros, estadísticas e inventarios establecidos por la autoridad superior de las escuelas;
- 4º Informar a la dirección general sobre el resultado de su inspección, indicando el estado de la enseñanza de las escuelas inspeccionadas y los defectos o inconvenientes que sea necesario corregir;

5º Informar sobre el estado de los edificios de propiedad pública en sus respectivas jurisdicciones, así como el estado y clase del mobiliario que tengan;

6º Pasar al presidente del consejo un informe mensual.

Art. 37. — Los inspectores de escuelas primarias podrán penetrar en cualquier escuela, durante las horas de clase, y examinar personalmente los diferentes cursos que comprende la enseñanza primaria.

Art. 38. — En cada distrito escolar funcionará además personalmente una comisión inspectora con el título de Consejo Escolar de Distrito compuesto de cinco padres de familia elegidos por la dirección general.

Art. 39. — Los miembros que componen el Consejo Escolar de Distritos durarán dos años en sus funciones.

El cargo de consejero de distrito será gratuito y considerado como una carga pública.

La dirección general resolverá sobre las excusaciones que se presentaren.

El Consejo podrá tener un secretario rentado.

Art. 40. — El consejo escolar de distrito dependerá inmediatamente de la dirección general y funcionará en el local de una de las escuelas públicas del distrito, si fuese posible, reuniéndose una vez por semana, a lo menos.

Art. 41. — El consejo escolar de distrito nombrará su presidente y tesorero, y dictará su propio reglamento, el cual debe ser aprobado por la Dirección General de las Escuelas.

Art. 42. — Corresponde al consejo escolar de distrito:

- 1º Cuidar de la higiene, de la disciplina y de la moralidad de las escuelas públicas de su distrito, a cuyo efecto éstas le serán franqueadas en cualquier momento;
- 2º Estimular por todos los medios a su alcance la concurrencia de los niños a las escuelas, proporcionando para este objeto, vestidos a los indigentes;
- 3º Establecer en las escuelas o fuera de ellas cursos nocturnos o dominicales para adultos;
- 4º Promover por los medios que crea convenientes la fundación de sociedades cooperativas de la educación y de bibliotecas populares de distrito;
- 5º Abrir anualmente el libro de la matrícula, multas y donaciones o subvenciones particulares, dando cuenta de su

- pereibo a la dirección general, y emplear dichas rentas en los objetos que la misma dirección general determine;
- 6º Castigar la falta de cumplimiento de los padres, tutores, encargados de los niños y maestros, a la obligación escolar, matrícula anual, asistencia, o a cualquier otra ley o reglamento referente a las escuelas del distrito. De su resolución podrá reclamarse a la dirección general en el término de tres días, y lo que ésta decidiere se ejecutará inmediatamente;
 - 7º Proponer a la dirección general de las escuelas los directores, subdirectores y ayudantes necesarios para las escuelas de su distrito, elevando con tal objeto, en caso de vacante, una terna de candidatos con los documentos justificativos de su capacidad legal para el magisterio;
 - 8º Proponer igualmente a la dirección general el nombramiento de su secretario, y nombrar por sí mismo escribientes y personal de servicio;
 - 9º Presidir en cuerpo o por medio de uno o más de sus miembros, los exámenes públicos de las escuelas de su distrito;
 10. Nombrar comisiones de señoras para visitar y examinar las escuelas de niñas o mixtas del distrito;
 11. El consejo escolar de distrito rendirá mensualmente cuenta a la Dirección General de Escuelas de los fondos escolares que hubiese administrado, y le informará sobre el estado de las escuelas de su distrito.

Art. 43. — Los miembros del consejo escolar de distrito responderán personalmente ante la justicia respectiva de la malversación de los fondos escolares ocasionada por actos en que hubiesen intervenido.

CAPÍTULO V

Tesoro común de las escuelas. — Fondo escolar permanente

Art. 44. — Constituirán el tesoro común de las escuelas:

- 1º El 20 por ciento de la venta de tierras nacionales en los territorios y colonias de la Nación, siempre que no se exceda el producido de 200.000 pesos moneda nacional;

- 2º El 50 por ciento de los intereses de los depósitos judiciales de la Capital;
- 3º El 40 por ciento de la contribución directa de la Capital, territorios y colonias nacionales;
- 4º El 15 por ciento de las entradas y rentas municipales;
- 5º El interés que produzca el fondo permanente de escuelas que se establece por esta ley y el que ya existe;
- 6º El importe del derecho de matrícula escolar establecido por el artículo 16 a razón de pesos 1 moneda nacional anual por cada año en edad escolar, con excepción de los indigentes;
- 7º El importe de las multas que imponga la autoridad escolar en los casos de los artículos 17, 18, 20 y 21, las cuales en ningún caso podrán exceder de 100 pesos moneda nacional, ni ser menores de 5 pesos moneda nacional por cada falta;
- 8º El importe de las penas pecuniarias y multas impuestas por cualquier autoridad en la Capital, territorios y colonias nacionales que no tuviesen diversa aplicación por alguna ley especial;
- 9º Los bienes que por falta de herederos correspondiesen al fisco nacional en la Capital, colonias y territorios nacionales;
10. El 5 por ciento de toda sucesión entre colaterales con excepción de hermanos;
11. El 10 por ciento de toda herencia o legado entre extraños, como de toda institución a favor del alma o de establecimientos religiosos, siempre que en los dos incisos anteriores la sucesión exceda de 1.000 pesos moneda nacional y sea abierta en la jurisdicción de la Capital, territorios y colonias nacionales;
12. Las donaciones en dinero, bienes muebles y títulos que se hiciesen a favor de la educación común de la Capital y territorios nacionales;
13. Los fondos que actualmente posee la administración de las escuelas públicas de la Capital;
14. Las sumas que el Congreso destine anualmente en el presupuesto general para pagos de sueldos y gastos de la Dirección General de Educación y especialmente para el sostén de las escuelas públicas de la Capital, territorios y colonias nacionales, costo de edificio, mobiliario, útiles y libros.

Art. 45. — De los fondos mencionados se reservará anualmente un 15 por ciento con destino

a la formación de un fondo permanente de educación, que será administrado con independencia del tesoro común de las escuelas, y cuyo capital no podrá ser distraído en objetos ajenos a la educación.

Art. 46. — El capital del fondo permanente será depositado en el Banco Nacional y gozará del interés acordado a los depósitos particulares. La renta que produzca dicho fondo se capitalizará durante dos años, después de cuyo término podrá aplicarse la renta sucesiva al sostén de la educación común.

Art. 47. — El tesoro nacional costeará las becas y demás gastos de enseñanza de los alumnos que se dediquen a la carrera del magisterio en las escuelas normales de la Capital o de las que se estableciesen en los territorios nacionales.

Art. 48. — Las municipalidades de la Capital, colonias y territorios nacionales proporcionarán los terrenos necesarios para los edificios de las escuelas primarias, y en caso de carecer de ellos o de no poseerlos en sitios convenientes, contribuirán a su adquisición con una tercera parte de su valor.

Art. 49. — La recaudación de los impuestos y rentas escolares que no tuviese una forma determinada en esta ley, se hará por los recaudadores de la Nación en la misma forma establecida para las rentas de ésta, pasando el producto de aquéllos en depósito al Banco Nacional a la orden de la Dirección General de Escuelas, dando inmediato aviso a la dirección.

Art. 50. — La obligación impuesta a los recaudadores de la Nación, en el artículo anterior, es extensiva a las municipalidades, en lo relativo a la parte de renta con que deben concurrir anualmente a la formación del tesoro de las escuelas, y a cualquiera otra autoridad, en lo tocante al importe de las multas o penas pecuniarias que impusiesen y cuyo destino por esta ley corresponde al sostén de la educación común.

Art. 51. — Las cantidades que destine el presupuesto de la Nación para el sostén y fomento de la instrucción primaria en la Capital, territorios y colonias nacionales, serán entregadas mensualmente por la Tesorería de la Nación a la Dirección General de Escuelas.

CAPÍTULO VI

Dirección y administración de las escuelas primarias

Art. 52. — La dirección facultativa y administración general de las escuelas estará a cargo de un Consejo Nacional de Educación, que funcionará en la capital de la República bajo la

dependencia del ministro de instrucción pública.

Art. 53. — El Consejo Nacional de Educación se compondrá de un presidente y cuatro vocales.

Art. 54. — El nombramiento de los consejeros será hecho por el Poder Ejecutivo por sí sólo, y el de presidente con acuerdo del Senado. Los miembros del Consejo Nacional de Educación podrán ser reelectos.

Art. 55. — Todos los miembros del Consejo conservarán su empleo durante cinco años, mientras dure su buena conducta y aptitud física e intelectual para el desempeño de su cargo.

Art. 56. — El cargo de miembro del Consejo Nacional de Educación es considerado como empleo de magisterio para todos los beneficios y responsabilidades que establece la ley.

Art. 57. — Son atribuciones y deberes del Consejo Nacional de Educación:

- 1º Dirigir la instrucción dada en todas las escuelas primarias con arreglo a las prescripciones de esta ley y demás reglamentos que en prosecución de ella dictare, según la respectiva enseñanza;
- 2º Vigilar la enseñanza de las escuelas normales de la Capital, colonias y territorios nacionales, proponer el nombramiento o renovación de su personal y concesión o caducidad de becas al Ministerio de Instrucción Pública;
- 3º Administrar todos los fondos que de cualquier origen fuesen consagrados al sostén y fomento de la educación común;
- 4º Organizar la inspección de las escuelas y la contabilidad y custodia de los fondos destinados al sostén de aquéllas;
- 5º Vigilar a los inspectores de las escuelas, reglamentar sus funciones y dirigir sus actos;
- 6º Ejecutar puntualmente las leyes que respecto de la educación común sancione el Congreso y los decretos que sobre el mismo asunto expidiere el Poder Ejecutivo, pudiendo requerir con tal objeto, cuando le fuere preciso, el auxilio de la autoridad respectiva por medio de un procedimiento breve y sumario;
- 7º Formar en Enero de cada año el presupuesto general de los gastos de educación común y el cálculo de los recursos propios con que cuenta, elevando ambos documentos por intermedio del Ministerio de Instrucción Pública al Congreso;
- 8º Tener tres sesiones semanales por lo menos;
- 9º Dictar su reglamento interno para todos los objetos de que le encarga esta ley,

- distribuyendo entre sus miembros, como lo estime más conveniente, las funciones que tiene a su cargo;
10. Distribuir para todas las escuelas públicas y particulares, formularios destinados a la matrícula escolar, registro de asistencia, estadística y censo de la población escolar, y dirigir estas operaciones como lo crea más conveniente;
 11. Dictar los programas de la enseñanza de las escuelas públicas, con arreglo a las prescripciones de esta ley y necesidades del adelanto progresivo de la educación común;
 12. Expedir título de maestro, previo examen y demás justificativos de capacidad legal, a los particulares que deseen dedicarse a la enseñanza primaria en escuelas públicas o particulares;
 13. Revalidar, en iguales circunstancias, los diplomas de maestros extranjeros;
 14. Anular unos u otros por las causas que determinará el reglamento de las escuelas;
 15. Prescribir y adoptar los libros de texto más adecuados para las escuelas públicas favoreciendo su edición y mejora por medio de concursos y otros estímulos y asegurando su adopción uniforme y permanente a precios módicos por un término no menor de dos años;
 16. Suspender o destituir a los maestros, inspectores o empleados por causa de inconducta o mal desempeño de sus deberes, comprobadas por los medios que previamente establezca el reglamento general de las escuelas y dando conocimiento al ministerio;
 17. Establecer conferencias de maestros en los términos y condiciones que creyese convenientes, o reuniones de educacionistas;
 18. Promover y auxiliar la formación de bibliotecas populares y de maestros, lo mismo que la de asociaciones y publicaciones cooperativas de la educación común;
 19. Dirigir una publicación mensual de educación;
 20. Contratar dentro y fuera del país los maestros especiales que a su juicio fuesen necesarios, con aprobación del ministro de instrucción pública.
 21. Proyectar a la brevedad posible la organización del fondo de pensiones para maestros, condiciones de una administración, y el modo y forma en que ha

- de hacerse efectivo el derecho a pensión establecido en el artículo 31. Este proyecto acompañado de un informe de los antecedentes que le sirvan de base, será elevado al Congreso por intermedio del Ministerio de Instrucción Pública;
22. Administrar las propiedades inmuebles pertenecientes al tesoro de las escuelas, necesitando de autorización judicial para venderlas, cederlas o gravarlas, cuando su conservación fuese dispendiosa o hubiese manifiesta utilidad en la cesión o gravamen;
 23. Recibir con beneficio de inventario herencias y legados; y en la forma ordinaria, todas las donaciones que con objeto de educación hiciesen los particulares, poderes públicos o asociaciones;
 24. Autorizar la construcción de edificios para las escuelas u oficinas de la educación común y comprar bienes raíces con dicho objeto, de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley de contabilidad y con aprobación del Poder Ejecutivo;
 25. Hacer las gestiones necesarias para obtener los terrenos que necesitasen las escuelas públicas;
 26. Atender y proveer, por lo relativo a las provincias, a la ejecución de las leyes de 23 de Septiembre de 1870 sobre bibliotecas populares y de 25 de Septiembre de 1871 sobre «subvenciones a la educación común» solicitando del Poder Ejecutivo los recursos necesarios para tal objeto y dictando las medidas que creyese conveniente para asegurar el empleo de dichos recursos.

Art. 58. — El Consejo Nacional de Educación presentará al principio de cada año un informe de todos sus trabajos al ministerio respectivo, y lo imprimirá en número suficiente de ejemplares con destino a hacerlo circular en el país y en el extranjero. Este informe contendrá una estadística completa de las escuelas.

Art. 59. — El nombramiento de todos los empleados de la dirección y administración de las escuelas primarias se hará por el Consejo Nacional de Educación, con excepción de aquellos cuya provisión estuviese determinada de una manera diversa por esta ley.

Art. 60. — Todos los miembros del Consejo Nacional de Educación son personalmente responsables de la mala administración de los fondos correspondientes a la educación común procedentes de actos en que hubiesen intervenido o tuviesen el deber de intervenir. La acción que

procede en tales casos será pública y durará hasta un año después de haber cesado en sus funciones cada uno de los miembros del Consejo.

Art. 61. — Toda autoridad nacional está en el deber de cooperar en su esfera al desempeño de las funciones del Consejo Nacional de Educación o de las personas que obren a su nombre, sea en la ejecución de las medidas escolares dictadas por el Consejo, sea en lo referente a datos o informes que aquel pudiese necesitar para los fines del cargo.

Art. 62. — Las actuaciones públicas que el Consejo Nacional de Educación o sus empleados oficiales tuviesen necesidad de producir ante cualquier autoridad para fines de la dirección y administración de las escuelas, serán libres de costas y se extenderán en papel común.

Art. 63. — Todos los bienes y valores pertenecientes al tesoro de las escuelas quedarán exonerados de todo impuesto nacional o provincial.

Art. 64. — El presidente del Consejo Nacional de Educación es el representante necesario del Consejo en todos los actos públicos y relaciones oficiales de la dirección y administración de las escuelas.

Art. 65. — El presidente del Consejo Nacional de Educación tiene además las siguientes atribuciones y deberes especiales:

- 1º Preside las sesiones del Consejo y decide con su voto las deliberaciones en caso de empate;
- 2º Ejecuta las resoluciones del Consejo;
- 3º Dirige inmediatamente por sí solo las oficinas de su dependencia, provee a sus necesidades y atiende en casos urgentes no estando reunido el Consejo, todo lo relativo al gobierno y administración general de las escuelas, con cargo de darle cuenta. En caso de disconformidad el Consejo no podrá desaparecer los actos de su presidente sino con el voto de los tercios de los consejeros;
- 4º Subscribir todas las comunicaciones y órdenes de cualquier género que sean con la autorización del secretario del Consejo.

CAPÍTULO VII

Bibliotecas populares

Art. 66. — El Consejo Nacional de Educación establecerá en la Capital una biblioteca pública para maestros.

Art. 67. — Toda biblioteca popular fundada en la Capital, territorios y colonias nacionales

por particulares o asociaciones sobre las bases permanentes, tendrá derecho a recibir del tesoro de las escuelas la quinta parte del valor que sus directores comprobasen necesitar o haber empleado en la adquisición de libros morales y útiles, con tal que se obliguen a observar las prescripciones siguientes:

- 1º A instalar la biblioteca en un paraje central y en edificio con capacidad suficiente para cincuenta lectores por lo menos;
- 2º A prestar gratuitamente los libros al vecindario mediante garantías suficientes, o facilitar su adquisición a precios razonables;
- 3º A llevar en debida forma sus catálogos y los registros de estadística necesarios, proporcionando en períodos determinados, a la autoridad escolar respectiva, los datos que le fueren solicitados sobre el movimiento de la biblioteca.

Art. 68. — Para obtener la subvención establecida en el artículo anterior, el director de la biblioteca presentará al Consejo Nacional de Educación una relación del edificio destinado para la biblioteca, con indicación de calle y número, y el certificado de depósito en un banco de la suma que se propone emplear en libros.

Art. 69. — La subvención acordada cesará inmediatamente, toda vez que los libros de la biblioteca se enajenen sin reponerlos, sin perjuicio de las penas y responsabilidades que pueda establecer el Consejo Nacional de Educación para el caso de engaño manifiesto.

CAPÍTULO VIII

Escuelas y colegios particulares

Art. 70. — Los directores o maestros de escuelas o colegios particulares, tienen los siguientes deberes:

- 1º Manifestar al respectivo consejo escolar de distrito su propósito de establecer o mantener una escuela o colegio de enseñanza primaria, indicando el sitio de la escuela, condiciones del edificio elegido para el objeto y clase de enseñanza que se proponen dar;
- 2º Acompañar a la manifestación anterior los títulos de capacidad legal para ejercer el magisterio que posea la persona destinada a dirigir la escuela;
- 3º Comunicar a la autoridad escolar respectiva los datos estadísticos que le fuesen

solicitados, y llevar con tal objeto en debida forma los registros establecidos por los artículos 19 y 21, según los formularios de que serán gratuitamente provistos por la autoridad escolar respectiva;

4º Observar las disposiciones del artículo 16 acerca de la matrícula escolar;

5º Someter a la inspección que en interés de la enseñanza obligatoria, de la moralidad y de la higiene pueden practicar cuando lo crean conveniente, los inspectores de las escuelas primarias y el consejo escolar de distrito;

6º Dar en el establecimiento el mínimo de enseñanza obligatoria establecida por el artículo 6º.

Art. 71. — El consejo escolar de distrito podrá negar a los particulares o asociaciones la autorización necesaria para establecer una escuela o colegio, siempre que no se hubiesen llenado los requisitos anteriores o que su establecimiento fuese contrario a la moralidad pública o a la salud de los alumnos. En iguales condiciones podrá clausurar, siempre que lo juzgue conveniente, cualquier escuela o colegio particular. En ambos casos los perjudicados podrá reclamar en el término de ocho días de la resolución del consejo escolar de distrito para ante el Consejo Nacional de Educación, y lo que éste decidiese se ejecutará inmediatamente.

Art. 72. — La falta de observancia por parte de los directores de las escuelas y colegios particulares, a las prescripciones anteriores, será penada con una multa de 20 a 100 pesos moneda nacional, según los casos y las reglas que previamente establezca el reglamento de las escuelas.

CAPÍTULO IX

Disposiciones complementarias

Art. 73. — Mientras no se practique un nuevo censo nacional, el distrito escolar creado por esta ley se establecerá, para las ciudades, con arreglo al cálculo de población o subdivisiones vecinales establecidas por sus respectivas administraciones.

Art. 74. — El Consejo Nacional de Educación procederá brevemente a establecer, para los fines de esta ley, la división de la población nacional en distritos, numerándolos sucesivamente y ubicando dentro de ellos, a medida que sea posible, la escuela o escuelas públicas a que cada vecindario tiene derecho.

Art. 75. — Las escuelas normales de la Capital serán sostenidas por el tesoro nacional y continuarán rigiéndose por los reglamentos y planes de estudios dictados por el Congreso y Ministerio de Instrucción Pública; pero en cuanto a su régimen interno, disciplina, administración e higiene dependerán exclusivamente del Consejo Nacional de Educación, quedando sujetas, por lo tocante a su personal y funciones, a las disposiciones de esta ley y reglamentos que el Consejo Nacional de Educación dictare.

Art. 76. — Los jueces darán participación al Consejo Nacional de Educación en todo asunto que por cualquier motivo afectase al tesoro de las escuelas. A los efectos de esta prescripción y de la probable necesidad de gestionar ante los jueces o funcionarios administrativos los intereses de las escuelas, el Consejo Nacional de Educación podrá nombrar procuradores y abogados, pagados del tesoro de las escuelas por mes o por año.

Art. 77. — Las faltas de asistencia injustificadas a las clases, oficinas, conferencias o sesiones de cualquier funcionario o empleado en la enseñanza, dirección o administración de las escuelas, producirán la necesaria pérdida de una parte de la dotación mensual del empleado o funcionario, en proporción a los días de su asistencia obligatoria por los reglamentos. Con tal objeto, cada escuela, oficina o Consejo llevará un libro de presencia, bajo la custodia del secretario o empleado que designen los reglamentos y en él firmarán los empleados o funcionarios que lo componen al entrar en sus oficinas. El contador general de las escuelas no procederá a formar las planillas mensuales de cada repartición sin tener a la vista los estados de los libros de presencia.

Art. 78. — Los fondos resultantes de pérdida de dotación por faltas de asistencia, se reservarán como base del fondo de pensiones.

Art. 79. — La Contaduría General de la Nación revisará anualmente los libros de la contaduría y tesorería de las escuelas, pudiendo hacerlo antes de ese tiempo cuando necesidades del servicio nacional lo exigiesen.

Art. 80. — Las prescripciones contenidas en esta ley con relación a los maestros inspectores y demás empleados de la instrucción primaria son aplicables, según el caso, a los dos sexos.

Art. 81. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en todo aquello que no

ha sido especialmente encomendado al Consejo Nacional de Educación.

Art. 82. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Cámara de Diputados, en Buenos Aires, a 22 de Julio de 1883.

RAFAEL RUIZ DE LOS RÍOS.

J. Alejo Ledesma,
Secretario.

Proyecto del Senado

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Apruébase el decreto del Poder Ejecutivo, fecha 28 de Enero del corriente año, que creó el Consejo Nacional de Educación y que continuará rigiendo con las siguientes modificaciones:

- 1º El Consejo Nacional de Educación a que se refiere el artículo 4º de dicho decreto se compondrá de un superintendente general, que disfrutará del sueldo que la ley de presupuesto le asigne y de seis consejeros cuyos servicios serán gratuitos,
- 2º La inspección de la educación común en el distrito de la Capital, en los territorios nacionales y en las provincias, en cuanto se relaciona con las leyes del Congreso, estará a cargo de dos inspectores generales con residencia en la Capital y un subinspector en cada provincia, cuyos deberes y atribuciones serán los que determine el Consejo Nacional de Educación. Los inspectores y subinspectores deberán ser nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del superintendente general y necesariamente deberán ser maestros normales y gozarán del sueldo que les asigne la ley de presupuesto;
- 3º El Consejo Nacional de Educación funcionará bajo la presidencia del superintendente general y se dará su propio reglamento;
- 4º Todos los empleados a sueldo del Consejo Nacional de Educación deberán concurrir a su oficina y permanecer en ella durante las horas de servicio.

Art. 2º — Créase una oficina de estadística de la educación común en toda la República, bajo la dirección del superintendente general con el personal de empleados que la ley de presupuesto determine.

Art. 3º — Continuará percibiéndose por el Consejo Nacional, con destino al sostenimiento de la educación común en la Capital, las rentas que le estaban asignadas por la ley de 26 de Septiembre de 1876, y demás disposiciones vigentes en la provincia de Buenos Aires en la fecha en que este municipio fué declarado Capital de la República.

Art. 4º — A los objetos de la subvención nacional acordada a las provincias por la ley de 25 de Septiembre de 1871, para el pago de salarios a los maestros, el Poder Ejecutivo, fijará, previo informe del Consejo Nacional de Educación, una escala graduada de sueldos, con relación a la situación de las escuelas y al número de niños que en ellas se eduquen.

La subvención se acordará con arreglo a esta escala, y se abonará directamente a los maestros de escuelas, previas las notificaciones necesarias, por intermedio del empleado o empleados nacionales que el Poder Ejecutivo determine.

Art. 5º — La subvención para compra de mobiliarios, libros y útiles a que se refiere la ley de 25 de Septiembre de 1871, no se acordará sino en el caso en que la compra de esos artículos se practicara por intermedio del Consejo Nacional de Educación y cuando a juicio de éste su clase y cantidad fuese proporcional y adecuada a las necesidades de la educación de la provincia de que se trate.

Igual intervención tendrá el Consejo Nacional de Educación en los subsidios para la construcción de edificios para escuelas.

Art. 6º — Queda derogado el artículo 7º de la ley de 25 de Septiembre de 1871 y todas las disposiciones que se opongan a la presente.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a 8 de Octubre de 1881.

FRANCISCO B. MADERO.
Carlos M. Saravia,
Secretario.

Antecedentes de la orden del día número 32

Ministerio de Justicia,
Culto e Instrucción Pública

Buenos Aires, Enero 28 de 1881.

POR CUANTO:

Es urgente proveer al gobierno de las escuelas de la Capital para no dañar a la educación común por la interrupción de los cursos escolares; y

CONSIDERANDO:

1º — Que mientras el Honorable Congreso no dicte la ley de educación que ha de regir en el territorio federalizado, corresponde al Poder Ejecutivo adoptar las medidas conducentes al régimen y administración de sus escuelas, tanto más cuanto que la ley nacional de 21 de Septiembre último, la autoriza suficientemente para adoptar las medidas y hacer los gastos que su ejecución demande;

2º — Que es conveniente conservar entretanto las disposiciones escolares que han estado en vigencia, en cuanto ellas sean adaptables y compatibles con el gobierno constitucional de la Capital;

3º — Que es igualmente conveniente y económico reunir en un solo departamento la administración de los establecimientos de educación a que la Nación provee directamente o por subvenciones del tesoro nacional;

El presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1º — Interin el Honorable Congreso provea por una ley especial a la educación común en el territorio de la Capital, continuarán vigentes en ella las instituciones escolares de la provincia, con las modificaciones que establece el presente decreto.

Art. 2º — El departamento de la Capital formará un solo distrito escolar, quedando por lo tanto sin efecto las disposiciones del párrafo 4º del capítulo 2º de la ley provincial de 26 de Septiembre de 1876 y demás disposiciones exparcidas en el cuerpo de ellas que se relacionan con las funciones escolares del distrito.

Art. 3º — Créase un Consejo Nacional de Educación, a cuyo cargo estará la dirección facultativa y la administración general del distrito escolar de la Capital, con arreglo a las disposiciones de la citada ley.

Art. 4º — El Consejo Nacional de Educación se compondrá de un superintendente general, presidente del mismo y de ocho vocales, que serán inspectores de educación nombrados por el Poder Ejecutivo y rentados con los fondos del tesoro nacional.

Art. 5º — Mientras el Honorable Congreso designe los sueldos que deberán gozar los miembros del consejo y empleados de su secretaría; queden éstos fijados en el modo y forma siguiente:

Superintendente, sueldo mensual de	500.—
Ocho vocales inspectores de educación, a \$ fts. 250 c u.	2.000.—
Secretario	250.—
Prosecretario	200.—
Contador mayor	200.—
Dos contadores auxiliares, a \$ 150 c u.	300.—
Un bibliotecario y archivero	120.—
Un oficial 1º	120.—
Tres escribientes, a \$ 60 c u.	180.—
Un mayordomo	40.—
Un portero	20.—

Art. 6º — El Consejo Nacional de Educación se hará cargo de todos los fondos, útiles y pertenencias del departamento escolar de la Capital, dando cuenta de ello al Ministerio de Instrucción Pública con el correspondiente informe.

Art. 7º — El presidente del consejo con acuerdo de éste, procederá inmediatamente a proyectar para el municipio de la Capital, la construcción de edificios para escuelas bajo un sistema completo, que responda a las necesidades de la población, según su densidad, a cuyo efecto elegirá los terrenos de propiedad pública o particular en que convenga construir los edificios; determinará en un plano del municipio, la ubicación de los terrenos elegidos y hará trazar por un arquitecto competente en esta clase de construcciones, los planos y presupuestos de las escuelas que sea necesario edificar.

Proyectará asimismo la adquisición o construcción de un edificio apropiado para el más pronto establecimiento de una escuela de artes y oficios que responda a las necesidades industriales del país, pudiendo elegirlo entre los de propiedad pública que puedan ser adaptados al efecto.

Art. 8º — La contaduría del Consejo Nacional de Educación abrirá una cuenta especial al distrito escolar de la Capital, la que arrancará con el haber que le corresponda por liquidación de fondos con la administración escolar de la provincia.

Art. 9º — Quedan bajo la dirección facultativa y administración general del Consejo Nacional de Educación, las escuelas de las colonias y territorios nacionales a las que provee el consejo por medio de sus inspectores y con los fondos del tesoro nacional, destinados a la educación común en ellas.

Art. 10. — Queda también a cargo del consejo, el fomento de las escuelas que las provincias sostienen por subvenciones nacionales: y sus atribuciones son las conferidas a la Comisión Nacional de Educación, por la ley de 25

de Septiembre de 1871 y demás disposiciones vigentes.

Art. 11. — Queda en consecuencia suprimida, la Comisión Nacional de Educación, dándose las gracias a nombre del gobierno a los que actualmente la componen, por los importantes servicios que han prestado al país en ese destino.

Art. 12. — El Consejo Nacional de Educación arbitrará las disposiciones convenientes para garantizar la fiel inversión de los fondos que se distribuyen a las provincias en virtud de la ley de subvenciones a la educación común y las propondrá al Ministerio de Instrucción Pública para su adopción.

Art. 13. — Se elevarán por conducto del consejo y se despacharán con su informe, todos los expedientes o gestiones sobre construcción y reparación de educación para escuelas en las provincias, colonias y territorios nacionales, adquisición de mobiliario, material científico, pago de sueldos y demás gastos a cargo del tesoro nacional.

Art. 14. — La contaduría del consejo abrirá una cuenta general a las escuelas subvencionadas de las provincias y a las de las colonias y territorios nacionales bajo la denominación de educación común de la Nación, cuyo haber lo formarán las rentas votadas a este efecto en el presupuesto general.

Art. 15. — Quedan asimismo a cargo del consejo, la Biblioteca Nacional y el fomento de las bibliotecas populares con arreglo a las disposiciones vigentes, cuyos gastos se cargarán a la cuenta general de que habla el artículo anterior.

Art. 16. — El consejo funcionará diariamente en un edificio apropiado, al que se trasladará la Biblioteca Nacional y el archivo de la extinguida Comisión Nacional de Educación, recibiendo de ellos bajo el correspondiente inventario, de que dará cuenta al ministerio y dispondrá la conservación bajo inventario del material científico que se adquiriera para proveer a los establecimientos de educación, el que estará a su cargo y del que deberá llevar prolija cuenta con expresión de las adquisiciones que se hagan y del destino que ellas reciban.

Art. 17. — Los miembros del consejo ejercerán la inspección de los establecimientos de educación en el territorio de la Capital, en las provincias, colonias y territorios nacionales periódicamente y según las necesidades públicas lo requieran, no pudiendo ausentarse a la vez más de cuatro inspectores a fin de que el consejo pueda funcionar diariamente.

Art. 18. — Queda en consecuencia derogado el decreto de Febrero 20 de 1879 que crea cuatro inspectores de instrucción primaria en las provincias.

Art. 19. — El presidente del consejo presentará a principios de Abril un informe especial y detallado sobre el estado de la educación en el territorio de la Capital, que comprenda la estadística de la enseñanza primaria en ella, métodos y plan de estudios vigentes, con las reformas que sean necesarias introducir y el proyecto de ley de educación que ha de presentarse al Honorable Congreso.

Art. 20. — El consejo dictará su reglamento interno y lo presentará al Ministerio de Instrucción Pública para su aprobación, pudiendo interinamente adoptar el de la extinguida comisión nacional o el del Consejo Superior de Educación de la Provincia con las consiguientes modificaciones.

Art. 21. — Comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacional.

ROCA.

M. D. Pizarro.

Sr. Cortés. — El miembro informante de la Comisión no ha venido, y por esta razón pediría a la Cámara que postergase la consideración de este asunto hasta la próxima sesión.

—Apoyado.

Sr. Igarzábal. — Me parece que ha llegado el momento de que el Senado se ocupe de este asunto. Es muy sencillo, y no sería la primera vez que, faltando el miembro informante y conociendo el asunto a tratarse, la Cámara procediera así.

Sr. Cambaceres. — Me consta que el señor Baltoré ha estado en el recinto esta mañana; se ha retirado por asuntos particulares, creyendo que este despacho no se iba a tratar hoy.

Hago moción para que pasemos a cuarto intermedio y hagamos avisar al señor Baltoré, que estoy seguro que inmediatamente vendrá a sostener el dictamen de la Comisión.

Sr. del Valle. — Me parece que la moción del señor senador por la Capital necesita ser aclarada. ¿Si no viene el señor miembro informante de la Comisión, el Senado va a prescindir en asunto de una naturaleza tan grave como el presente, del informe de la Comisión?

¿Va a establecer este precedente, que no solamente compromete el resultado de la cuestión actual, sino que crea un precedente peligroso para nuestras deliberaciones posteriores?

¿Por qué, señor presidente, recurrir a estos medios que la honradez no acepta, para venir a prevalecerse de mayorías accidentales, de circunstancias especiales que tienen alejado de la Capital a un senador, de la circunstancia más especial y más desgraciada aún, que tiene postrado en cama a otro señor senador, cuyas ideas son conocidas en contra de la opinión de la mayoría accidental que, en este momento pasando por sobre todas las formas, quiere venir a la discusión de esta ley capital, la ley más importante quizá que tendremos que discutir durante todo el período de nuestras sesiones, sin llenar las formalidades más elementales de toda discusión amplia, cuando es el informe, no ya de la minoría de la Comisión, sino de la mayoría?

No por obtener el triunfo de las ideas de uno u otros, sino por respeto a todos, por respeto a la seriedad del cuerpo parlamentario en que estamos sentados, deben condenarse todo estos procedimientos, una vez que son denunciados por mis labios en este momento.

Yo no defiendo el resultado de la doctrina a que voy a prestar mi apoyo, no; lo que defiendo en este momento es el decoro del Senado. Digo: pasemos a cuarto intermedio, y si el señor senador Baltoré puede venir a la sesión, y viene en tiempo para que esta discusión comience, sea en buena hora, empecemos la discusión, que no se ha de votar hoy día el asunto, porque es materia que se presta a largas consideraciones. Si, por el contrario, el miembro informante no puede ser habido, posterguemos para mañana o pasado toda discusión de este asunto. Esto está en el orden de las ideas de la mayoría, puesto que el otro día se hizo moción de fijar día especial para empezar esta discusión, precisamente para que todos los señores senadores pudieran estar en su puesto y venir a desempeñar su misión como su conciencia se lo aconseje.

Por esto, amplió la moción del señor senador por Buenos Aires, y propongo que la resolución de la Cámara sea en el sentido indicado: que volvamos a sesión si concurriese el señor miembro informante de la mayoría.

Sr. Cambaceres. — Yo voy a permitirme agregar dos palabras.

El señor miembro informante ignoraba que la Cámara iba a aplazar el despacho de la Comisión Militar acordando pensión a las familias de los jefes y oficiales muertos en las rebeliones del 74 y 80.

Esta circunstancia ha podido hacerle creer al señor senador Baltoré que este asunto no se iba a tratar hoy, porque la Cámara resol-

vió el sábado que el asunto referente a la educación se trataría después de considerados todos los asuntos repartidos; y desde que ha sido aplazado el referente a las viudas e hijos de los jefes y oficiales que murieron en las rebeliones del 76 y 80, debe aplazarse el relativo a la educación hasta que se consideren aquellas.

Sr. Igarzábal. — Pido la palabra.

He apoyado la moción del señor senador por la Capital, pero no estoy de acuerdo con la ampliación que le hace el señor senador por Buenos Aires.

Señor presidente: es muy lamentable que el solemne debate en que va a entrar la Cámara comience por el cargo y por las exclamaciones que se ha permitido hacer el señor senador por Buenos Aires. El ha dicho que hay una mayoría formada, organizada accidentalmente; él se ha permitido decir que se trata de aprovechar la ausencia de un senador.

Todo esto es muy grave, señor presidente, si se tiene en cuenta que ha sido dicho por uno de los senadores más ilustrados, por uno de los hombres más versados en las prácticas parlamentarias, por uno de los hombres que más testimonios ha dado del respeto que debe a la Cámara a que pertenece...

Sr. del Valle. — Quiero precisamente salvar los respetos de la Cámara; por eso necesito decir la verdad.

Sr. Igarzábal. — Aunque no fuera, señor presidente, sino por eso, francamente no encuentro ningún motivo para que el Senado aplaze este asunto.

El mismo señor senador por Buenos Aires, que ahora se muestra dispuesto a que se aplaze la consideración de este asunto, tal vez indefinidamente...

Sr. del Valle. — No, señor.

Sr. Igarzábal. — ... fué uno de los que en una sesión anterior, cuando el señor senador por Tucumán hizo moción para que se tratara este asunto el jueves de la presente semana, es decir, en una semana más, se opuso.

Sr. del Valle. — Voté por que se tratara el martes, dos días antes de lo que indicaba el señor senador por Tucumán, lo que le prueba al señor senador que no entran en mis medios estos caminos de postergaciones. Creí que estábamos en condiciones de hacerlo, y si todos los señores senadores se encontraran presentes en este momento, estaría por eso mismo.

Sr. Igarzábal. — La teoría del señor senador nos lleva a este resultado: que si por cualquier causa un senador se enferma o se ausenta, la Cámara debe suspender sus funciones.

Esto es inadmisibile. Si está aquí presente el Senado de la Nación, el Senado no debe ser detenido por ninguna consideración.

Háganse todas las concesiones que permitan las prácticas parlamentarias, espérese en un cuarto intermedio al señor miembro informante, en buena hora; pero tenga entendido la Cámara que si el miembro informante de la mayoría de la Comisión no se presenta, sabiendo como sabemos que no está enfermo, es porque algunas otras razones le habrán impedido venir a cumplir su deber.

La Cámara no puede suspender sus funciones, no sería decoroso que lo hiciera porque a un señor senador se le ocurra no venir.

Sr. Ortiz. — Está calumniando el señor senador.

Sr. Igarzábal. — Estoy por la moción del señor senador por la Capital, pero no con la ampliación que le hace el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción del señor senador por la Capital, de pasar a cuarto intermedio, para esperar la presencia del señor miembro informante de la Comisión de Legislación.

Sr. Avellaneda. — ¿Mandando llamar al señor miembro informante?

Sr. del Valle. — Se puede votar por partes.

Sr. Baibiene. — Antes de votarse pido la palabra, señor presidente.

Deseo saber qué tiempo están obligados los senadores a esperar en antecámaras a que la sesión se abra, por el reglamento. No lo recuerdo en este momento.

He oído decir a un señor senador por Buenos Aires que el señor Baltoré, miembro informante de la mayoría de la Comisión de Legislación, ha estado en antecámaras y desearía saber si ha estado el tiempo que le impone el reglamento y se ha ausentado usando de su derecho.

Si realmente se ha ausentado usando de su derecho, desearía que alguno de los señores senadores que están por que el asunto se trate inmediatamente, a pesar de que el miembro informante de la mayoría de la Comisión no se encuentre presente, me dijera si recuerda algún otro caso en que se haya hecho la misma cosa. El señor secretario podría informar.

Sr. Secretario. — El señor presidente indica de vez en cuando la hora de entrar a sesión, que es las 2 de la tarde.

Hay la costumbre de esperar desde esa hora hasta las 2 y media.

Sr. Ortiz. — Puede informar respecto de la segunda pregunta que hacía el señor senador: si ha sucedido alguna vez que por ausencia del

miembro informante se haya suspendido la consideración de un asunto.

Sr. Secretario. — Sí, señor; en diversas ocasiones se ha hecho eso.

Sr. Bayo. — ¿A qué hora se ha retirado el señor Baltoré?

Sr. Baibiene. — El señor senador por Buenos Aires podría decirlo.

Sr. del Valle. — No puedo decirlo, porque no he estado presente.

Sr. Iriondo. — ¿Ha dado aviso?

Sr. Secretario. — No ha dado aviso.

Sr. Iriondo. — No es un derecho retirarse sin pedir permiso del presidente.

Sr. Cambaceres. — Estando en sesión.

Sr. Presidente. — Se va a votar por partes la moción del señor senador por la Capital. Si se pasa a cuarto intermedio para esperar la presencia del señor senador miembro informante de la Comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se va a votar la indicación del señor senador por Buenos Aires, para que en caso de que no concurra el señor Baltoré, quede fijado el primer día de sesión para tratar la ley de educación.

—Votada esta moción es rechazada.

Sr. Presidente. — Pasaremos a cuarto intermedio.

—Así se hace.

—Vuelven a sus asientos los señores senadores.

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

El oficial de la Secretaría que fué a buscar al señor Baltoré, ha informado que en el alojamiento de dicho señor senador le contestaron que había salido temprano y que todavía no había vuelto.

Sr. Igarzábal. — Está presente otro miembro de la Comisión; él podrá darnos las razones en que funda su despacho.

Sr. Cortés. — Yo no estoy en condiciones de informar a la Honorable Cámara, porque no me he preparado para ello. El señor Baltoré estaba encargado de hacerlo.

Sr. Igarzábal. — Entonces oiremos a la minoría.

Sr. Gelabert. — Es la primera vez que el Senado se propone a todo trance tomar en consideración un asunto de tanta importancia, sin oír al miembro informante de la Comisión.

Y esto es más notable por la circunstancia de que en la sesión anterior se propuso que se señalase el martes, es decir, hoy, para tratarse esta cuestión, y los que se opusieron son precisamente los que ahora no quieren dar tiempo, ni siquiera a que esté presente el señor miembro informante de la mayoría de la Comisión.

Yo pido a los señores senadores que se fijen en que no se va a perder la causa del país ni a colocar en un caos a la Nación porque este asunto no se considere hoy mismo.

Sr. Presidente. — La Cámara resolvió que se llamara al señor miembro informante y que, si éste no venía, entrara a discusión el asunto.

Sr. Baibiene. — Se va a fallar en una causa, sin oír a una de las partes: falta su abogado.

Sr. Zapata. — Pido la palabra.

Voy a proponer que se levante la sesión, es decir, a hacer una moción que es previa, y la hago en obsequio a la seriedad del Honorable Senado.

No es la primera vez, señor presidente, que agitados por estos movimientos populares se viene a exigir del Senado una resolución imprevista.

Está en la conciencia de todos que esta es una de las cuestiones más graves y más trascendentales. Los mismos señores senadores que quieren que se trate hoy la consideran así, y sin embargo, al proceder con tanta exigencia, olvidan la trascendencia de la cuestión y no conceden siquiera que el miembro informante de la mayoría de la Comisión, como sostenedor de las ideas contrarias, venga a hacer conocer las razones en que funda su despacho.

No se explica cómo en una cuestión de esta naturaleza los señores senadores de edad más avanzada que la mía exijan que se resuelva esta cuestión con una precipitación que no era esperada por ninguno de mis honorables colegas y se resuelva, como decía el señor senador por Corrientes, sin oír a una de las partes: vamos a fallar en uno de los juicios más importantes que han venido a la resolución del Senado sin oír al miembro informante de la mayoría de la Comisión, y va a suceder esto, que me permito de calificar de ridículo: la minoría contestando al despacho de la mayoría que no se ha oído fundar ni defender en el Senado.

Hago moción, pues, para que se levante la sesión, a fin de que lo tratemos en la sesión próxima con la presencia del miembro informante de la mayoría de la Comisión.

No se va a perder esta cuestión, cualquiera sea el tiempo que se demore, porque no se trate hoy precisamente. ¿Qué es lo que van buscando los señores senadores que quieren precipitarnos a tomar hoy mismo una resolución sobre este asunto? ¿Por qué no esperan hasta mañana?

Si me fuera permitido juzgar intenciones, abundaría en las opiniones del señor senador del Valle, pero esto no me es permitido.

Por estas razones pido que se suspenda la consideración de este asunto y se levante la sesión.

Sr. Juárez Celman. — Voy a ampliar la moción del señor senador en el sentido de que se levante la sesión, pidiéndose a la Cámara de Diputados el recinto para continuarla mañana.

Creo que en esta forma no tendrán inconveniente los señores senadores: se trata de una suspensión por veinticuatro horas, con el solo objeto de que esté presente el miembro informante.

Sr. Igarzábal. — Yo pregunto si no hay ningún otro senador que haya estudiado el proyecto.

Sr. Juárez Celman. — Es que el señor miembro informante tiene el deber de estudiarlo más especialmente y de informar a la Cámara, y nosotros tenemos el deber de oírlo.

Sr. Igarzábal. — Nunca ha ocurrido que el miembro informante de una Comisión falte intencionalmente, sabiendo que la Cámara está reunida.

Sr. Juárez Celman. — El señor senador no tiene derecho de juzgar las intenciones de otro señor senador. El señor senador que en sesiones anteriores votó en contra de que se tratara hoy este asunto, quiere ahora que se trate a todo trance, para aprovecharse de la ausencia del miembro informante, y de una mayoría accidental.

Si entramos a juzgar intenciones, yo también juzgo la del señor senador.

Sr. Alvear. — Como veo que se insiste mucho en recordar los antecedentes de la última sesión, me voy a permitir rectificarlos.

Precisamente fuimos nosotros, es decir, los que estamos por cierto orden de ideas, los que pedimos el tiempo necesario para que concurriese el mayor número de senadores a este debate, y fueron precisamente los mismos señores senadores que hoy insisten en lo contrario...

Sr. Cambaceres. — Pero por distintas razones

Sr. Alvear. — ... los que se opusieron.

Las razones a que se refiere el señor senador, son las mismas que ya conocemos.

Sr. Juárez Celman. — Es una razón nueva: la de no estar presente el señor Baltoré, miembro informante.

Sr. Alvear. — La ausencia del miembro informante, que es una cuestión que tiene tantos abogados ilustrados, es de muy poca consideración.

El señor miembro informante debía saber que, tratándose por su orden los asuntos, entraría a discusión este proyecto...

Sr. Cambaceres. — Es que hemos suspendido el asunto de las viudas.

Sr. Alvear. — Y ahora, apreciando intenciones, el señor miembro informante, sin duda, habiendo contado el número de votantes, el señor Baltoré, que es uno de los senadores más puntuales en su asistencia al Senado...

Sr. Baibiene. — Y también uno de los más enfermizos.

Sr. Alvear. — ... ha salido temprano de su casa y no ha vuelto aún, lo que prueba que está en perfecto estado de salud...

Sr. Baibiene. — Tal vez ha salido a dar un paseo higiénico.

Sr. Alvear. — Indudablemente la ausencia del señor miembro informante es voluntaria: abandona voluntariamente su puesto.

Sr. Cambaceres. — Pero no intencionalmente.

Sr. Alvear. — ¿Es esta suficiente razón para que no se discuta el proyecto?

Sr. Juárez Celman. — Sucede esto todos los días.

Sr. Alvear. — Además, se resolvió por una votación que se llamara al señor miembro informante y que si no venía trataríamos en el acto la cuestión.

Sr. Juárez Celman. — No se ha resuelto eso.

Sr. Alvear. — El señor miembro informante no ha venido, y ahora, con una nueva serie de razones cuyo alcance se comprende, se quiere postergar esta discusión.

Señores: si se tratase de una fracción de la Cámara desprovista de claras inteligencias, de hombres del foro, de partidistas apasionados de la cuestión, indudablemente, se podría tener la deferencia de decirles: tómense ustedes tiempo; pero cuando se sabe que al mismo tiempo que se procede con esa suma inmensa de mansedumbre, sólo se busca traer otros senadores que están ausentes haciendo uso de su derecho o sufriendo las consecuencias de un mal físico, para no discutir, sino teniendo mayoría.

Sr. Juárez Celman. — No esperamos ningún senador para mañana.

Sr. Alvear. — Pero mañana no tendremos número.

Sr. Cambaceres. — ¿No les hemos dado número hoy?

Sr. Alvear. — O la Cámara de Diputados no nos cederá el recinto y nos encontraremos, por un acto de complacencia con los señores senadores, con las esperanzas defraudadas todos los que tenemos el deseo legítimo de ver esta cuestión resuelta. Así es que yo, señor presidente, que no deseo alargar esto, sino venir de una vez a la que tenemos entre manos, insisto en que continuemos.

El señor miembro informante de la mayoría de la Comisión no está presente, pero por muy lamentable que sea su ausencia, no podemos suspender esto; le daremos la palabra a cualquiera de los honorables senadores que tienen las mismas ideas y que podrá reemplazarlo con un caudal más o menos poderoso de conocimientos, en lo que no hará sino un uso legítimo de su derecho y estoy cierto que la causa que defienden no perderá absolutamente nada. No queremos, pues, señores senadores, que esta causa, que es la de los más débiles, puesto que según dicen, no cuenta sino con una minoría relativa en el Congreso, por lo que he dicho y otras muchas razones que omito, venga a perderse por un acto de complacencia que no tenemos el derecho de hacer. Por esto pido que la cuestión se discuta.

He dicho.

Sr. Gómez. — El jueves, cuando se discutió esta misma cuestión, los señores senadores que están en cierto orden de ideas, como ha dicho el señor senador por la Capital, sostuvieron que no debía tratarse hoy ese asunto, sino el jueves. Los que estamos en otro orden de ideas éramos entonces mayoría, y sin embargo de haber otro señor senador hecho moción para que se tratara hoy con prescindencia de todo otro asunto, votamos en contra, accediendo a lo que deseaban los señores que estaban en otro orden de ideas.

Fuimos entonces menos recalcitrantes, menos exigentes. Ahora se niegan 24 horas que se piden, hasta mañana, simplemente; creo que no hay igualdad de proceder en esta circunstancia, y yo reclamaría de los señores senadores, que están hoy en mayoría, un procedimiento igual. Creo que sería cortés y respondería a nuestro procedimiento del sábado.

Los señores senadores deben tener presente que entonces faltaban el señor senador Febre y el señor senador Bayo, que no estaban en la capital de la República, y que los que votábamos porque no se tratase a todo trance ese

día, les facilitamos los medios para que pudieran llamar los compañeros de causa en esta cuestión.

Así, pues, yo reclamaría de los señores senadores que están en mayoría un procedimiento igual.

Sr. Alvear. — Pero está a la orden del día.

Sr. Gómez. — Iba a estar también en aquellos entonces a la orden del día.

Sr. Alvear. — Recién está a la orden del día.

Sr. Cambaceres. — ¡Pero hemos aplazado el asunto de las pobres viudas, que estaba a la orden del día!

Sr. del Valle. — Yo quiero marcar la situación en que se coloca la mayoría de la Cámara, que nos obliga a tratar este asunto en esta sesión.

Cuando el sábado se formuló la moción de fijar día para la consideración de este asunto, no se tuvo tanto en cuenta señalar un término, para que los diversos señores que se encontraban fuera de la Capital llegaran a ella, cuanto fijar día para que en él todos los señores que pudieran estar en el recinto se encontraran en éste.

El señor senador que hizo una moción fijando el jueves para este objeto, se fundaba precisamente en una moción anterior, hecha por mi parte, cuando se trataba del Registro Civil en que pedía con ocho días de anticipación que el Senado fijase día para ocuparse de esta cuestión, que aquella era una moción de postergación, con propósito de dilatar la sanción de la ley.

Fundándose en ese procedimiento, el señor senador mocionante indicaba la conveniencia de que se fijara el jueves para tratar este asunto, y si aquella moción no fué aceptada, fué, señor presidente, porque algunos señores senadores creían que el objeto se llenaba fijando el martes; pero no fué aceptada tampoco la moción de que se fijara el martes, porque otro señor senador, como el señor senador por San Juan, pensaba que el martes era un día en que no podrían tal vez encontrarse presentes algunos de los señores senadores que no estaban entonces en la Capital, y que aparecería como un abuso de la mayoría, el fijar tan breve término para empezar a tratar este asunto.

Hoy, señor presidente, ha ocurrido lo siguiente: estaba repartida una orden del día que contenía diversos asuntos; muchos hemos supuesto, y hemos podido suponer, que la ley de educación no vendrá al debate en la sesión de hoy, porque la orden del día era materia suficiente para ocupar a la Cámara hasta el fin de la sesión, tanto más cuanto que no estaba

señalada esta sesión especialmente para ocuparse de este asunto. Por un procedimiento de la Cámara se ha resuelto suspender la consideración de diversos asuntos, anticipándose así el debate sobre la ley de educación.

Entonces, pues, está perfectamente en el orden y en los antecedentes de esta Cámara, que cuando se presentan de improviso a la consideración de ella estos asuntos, se posterguen para fijar el día en que ha de comenzar la discusión.

Se ha dicho que no se puede tener sino el propósito de hacer mayoría, haciendo venir a algunos señores senadores que se encuentran en este momento fuera de la Capital; pero, como ha observado perfectamente el señor senador por Córdoba, no hay posibilidad de que llegue ningún senador que esté fuera, como por ejemplo el señor senador Moyano.

Además, se ha manifestado el temor de que los señores senadores presentes no concurren a la sesión de mañana. No me parece que subsista, después de la declaración del señor senador por Córdoba, que por otra parte podría hacerla a nombre de todos sus colegas. Ninguno de nosotros faltaría a su deber desconociendo la orden de la Cámara en el día que ella fijara. Si tal cosa hubiera podido entrar en nuestro procedimiento, lo habríamos realizado en presencia de la resolución de la Cámara, que nos obliga a entrar a cuarto intermedio; no, hemos vuelto al recinto de la Cámara porque era nuestro deber.

Hay, pues, que rechazar estas suposiciones.

Entonces, ¿qué se pierde con esperar hasta mañana? La única observación es ésta: la posibilidad de que la Cámara de Diputados no ceda el recinto para que sesione el Senado. A este respecto, no puedo emitir opinión; me guardaría bien de entrar en el terreno de las suposiciones en que ha entrado el señor senador por la Capital, porque tratándose de las opiniones de la otra Cámara, el Senado no tiene derecho, no digo de presumirla, ni siquiera de juzgarla después de producida. Así, pues, he de votar por la moción.

Sr. Presidente. — Se va a votar si se aprueba la moción del señor senador por Córdoba.

Sr. Juárez Celman. — Que la lea el señor secretario.

—Se lee.

—Votada si se aprueba, resulta negativa contra 12 votos.

Sr. del Valle. — Pido la palabra. Hago moción para que se llame al señor ministro.

Sr. Secretario. — Se encuentra presente el señor ministro.

Sr. Cambaceres. — Deseo saber qué es lo que dispone el reglamento respecto a la presentación de proyectos. Si el reglamento prescribe si deben leerse íntegros, hago moción para que se lea íntegro el proyecto.

— Entra al recinto el señor ministro de justicia, culto e instrucción pública

Sr. Secretario. — El reglamento dispone que cuando entre los asuntos entrados...

Sr. Cambaceres. — Permítame el señor secretario; los asuntos entrados no son despachos de comisión.

Sr. Presidente. — Muchas veces la Cámara ha resuelto que se suprima la lectura.

Sr. Gelabert. — Nunca ha resuelto nada.

Sr. Cambaceres. — Hay que leerlo.

Sr. Igarzábal. — Yo pedí que se suprimiera la lectura, y hubo asentimiento general.

Varios señores senadores. — No se ha votado.

Sr. Cambaceres. — Que se ponga a votación mi moción.

Sr. Gómez. — ¿Qué moción?

Sr. Cambaceres. — Yo hago moción para que se lea el proyecto íntegro.

Sr. Gómez. — ¡Si el reglamento lo manda!

Sr. Cambaceres. — Pero el señor senador por San Juan dice que no hay derecho para ello; es por esto que he hecho esa moción.

Sr. Gómez. — Sólo que hubiera una sanción en contra.

Sr. Presidente. — Se había resuelto.

Varios señores senadores. — No se ha resuelto nada.

Sr. Presidente. — No hubo observación alguna en contra cuando lo consulté; ninguna voz se levantó pidiendo que se leyera. Esa fué la resolución. Ahora y si algún señor senador hace moción, se pondrá en discusión, si es apoyada.

Sr. Baibiene. — Es una de las lecturas establecidas por el reglamento.

Sr. Zapata. — No hay necesidad de moción; basta que se pida su lectura.

Sr. Presidente. — Que resuelva la Cámara.

Sr. Igarzábal. — Y después que se vote la moción del señor senador, yo hago moción para que el Senado se constituya en sesión permanente, día y noche, hasta que se resuelva el asunto.

Sr. Zapata. — ¡Eso es lo que le faltaba al señor senador!

Sr. del Valle. — Es consecuente siempre con sus ideas el señor senador. ¡Hace bien!

Sr. Cambaceres. — Yo pido que se cumpla con la prescripción del reglamento, leyendo el proyecto.

Sr. Presidente. — Hay una moción previa que votar. El señor senador por San Juan ha hecho moción de continuar en sesión permanente.

Sr. Gómez. — No sé si ha sido apoyada.

Sr. Presidente. — Lo ha sido. Está en discusión la moción del señor senador por San Juan.

Sr. Juárez Celman. — Desearía que fundara su moción el señor senador que la ha hecho.

Sr. Igarzábal. — La he hecho y basta. El señor senador no me puede obligar a que hable. ¡Muchas gracias!

Sr. del Valle. — ¿Qué le parecería al señor senador por San Juan que pidiera que se cerrara el debate antes de haberlo comenzado?

Sr. Igarzábal. — Yo no lo apoyaría, porque estoy dispuesto a disentir el asunto.

Sr. del Valle. — Sí que lo apoyaría: está dispuesto a votarlo sin discusión.

Sr. Presidente. — Está en discusión la moción del señor senador por San Juan.

Sr. Gelabert. — ¿Cuál?

Sr. Juárez Celman. — De que estemos día y noche en el recinto.

¿Hasta cuándo?

Sr. Presidente. — Permanecer en sesión permanente hasta la terminación del asunto.

Sr. del Valle. — No podemos, porque el recinto no es nuestro de noche. La noche del martes corresponde a la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción del señor senador por San Juan.

Sr. Zapata. — Yo desearía un esclarecimiento sobre esto, como lo ha pedido el señor senador por Córdoba: no sé hasta cuándo se nos puede obligar a estar aquí.

Sr. Igarzábal. — La moción es para terminar el asunto en discusión.

Sr. Zapata. — Y si dura toda la noche sin que se termine, ¿vamos a permanecer aquí toda la noche?

Sr. Igarzábal. — Si la Cámara lo dispone así, los señores senadores tienen que acatar su resolución.

Sr. Zapata. — Entonces, en este camino, aprovechando la mayoría que tienen los señores senadores, podrían hacer moción para que se votara el despacho de la minoría de la Comisión.

—Se vota la moción del señor senador por San Juan, y es rechazada.

—Aplausos en la barra.

Sr. Bayo. — Pido que se rectifique la votación.

—Se vuelve a votar la moción, y resulta negativa de 11 votos.

Sr. Presidente. — Está en discusión el proyecto.

Sr. Juárez Celman. — Que se lea el proyecto como lo ha pedido el señor senador por la Capital.

Sr. Alvear. — A propósito de esa moción, yo había...

Sr. Cambaceres. — No es moción, es un derecho que da el reglamento a todo senador.

Sr. Alvear. — Cuando no se ha hecho uso de él en la oportunidad, es necesaria una moción previa que tenga la aceptación de la Cámara.

Sr. Cambaceres. — ¿Dónde existe la disposición en que se funda el señor senador?

Sr. Alvear. — ¿Y el señor senador dónde encuentra establecido lo contrario?

Sr. Cambaceres. — En el reglamento, que me da el derecho de pedir que se lea todo despacho...

Sr. del Valle. — No sólo da el derecho, sino que manda que se lea todo proyecto que entra a la consideración de la Cámara.

Sr. Alvear. — Lo único que se quiere conseguir con esto, es ganar tiempo para tener mañana mayoría. Deseo al menos que esto quede bien manifiesto.

No vengamos, pues, con estas «tiradas» eicérronicas para obtener la mayoría: se espera burlarse de este modo de la mayoría.

Sr. Cambaceres. — Si como dice el señor senador vamos a tener mayoría, no nos burlamos de la mayoría.

Sr. Alvear. — El asunto estaba a la orden del día. Así es que todas estas mociones de suspender la discusión, de llamar al señor ministro, son medidas dilatorias para venir a este mismo fin.

Sr. Presidente. — Me permito recordar a los señores senadores que no hay nada en discusión.

Sr. Iriondo. — El señor senador por la Capital, al solicitar la lectura del proyecto en general, no ha hecho sino pedir la ejecución del reglamento. El reglamento establece que se lea.

Para lo que es necesario hacer moción, es para que se suspenda la lectura, y yo la hago.

—Apoyado.

Sr. Juárez Celman. — ¿Se puede hacer mociones contra el reglamento? Quisiera que se me informara al respecto.

Sr. Iriondo. — El reglamento permite esas mociones previas, y aun en casos en que se trata de asuntos más serios, pueden considerarse sobre tablas, alterándose la legislación ordinaria establecida para su tramitación por el mismo reglamento; y no puede negarse que esta práctica se observa constantemente, desde que, principiando por el Código Civil, es justamente por mociones de este género que se trató sin leerlo...

Sr. Juárez Celman. — Por que no ha habido quien pida lo contrario.

Sr. Iriondo. — Al contrario; es práctica hacer moción para suprimir la lectura de los asuntos.

Sr. Gómez. — ¿Quién la ha hecho?

Sr. Iriondo. — Yo la he hecho, y ha sido apoyada.

Sr. Gómez. — Entonces está en su derecho.

Sr. Juárez Celman. — Yo creo, señor presidente, que la moción del señor senador por Santa Fe estaría perfectamente justificada, si antes no se hubiera pedido la lectura del proyecto. Hay ciertas disposiciones del reglamento que, para que se cumplan, basta que un senador lo pida, de manera que la indicación del señor senador importa una derogación del reglamento.

Sr. Gómez. — El reglamento lo autoriza para alterar el orden de la discusión.

Sr. Juárez Celman. — El reglamento no dice que todos los asuntos se leerán, sino que siempre que un senador lo pida, debe hacerse la lectura. Luego, hay derogación del reglamento.

Desearía que me informara al respecto el señor secretario.

Sr. Secretario. — La práctica...

Sr. Juárez Celman. — No le pido la práctica, sino lo que dice el reglamento.

Sr. Igarzábal. — No dice lo que dice el señor senador.

Sr. Juárez Celman. — No le pregunto al señor senador.

Sr. Barros. — Me parece que es enteramente incorrecto lo que sostiene el señor senador por Córdoba.

Sr. Juárez Celman. — ¡Gracias!

Sr. Barros. — Una vez que se ha dado cuenta de un asunto y ha sido puesto en discusión por el señor presidente, no está en la facultad del

señor senador interrumpir el debate. No podemos estar renovando a cada momento estas cuestiones, una vez que ha pasado la oportunidad.

Sr. Juárez Celman. — Queremos oír la lectura del proyecto.

Sr. Barros. — Es una cosa pasada de moda la que estamos discutiendo aquí. (*Hilaridad*).

Sr. Cambaceres. — Que se lea el artículo del reglamento referente al orden de la discusión de los proyectos.

Sr. Presidente. — Hay una moción apoyada por la Cámara, y tiene que ser votada.

Sr. Juárez Celman. — Se me está por dar el dato que he pedido respecto a si se puede hacer mociones para derogar el reglamento.

Sr. Secretario. — (*Leyendo*): «Artículo 70. — Toda Comisión, después de considerar un asunto, y de convenir uniformemente en los puntos de su dictamen o informe a la Cámara, designará el miembro...»

Sr. Cambaceres. — Aquí no tenemos miembro informante.

Sr. Secretario. — (*Leyendo*): «... que lo haya de dar y sostener la discusión. En el segundo, designará al redactor de él, y aprobada que sea la redacción, designará el que haya de sostener la discusión.»

Sr. Gómez. — Eso no es pertinente al caso.

Sr. Juárez Celman. — Que se lea el artículo que establece que basta que pida un senador la lectura de un proyecto, para que se lea íntegro, o que, si lo hay, se lea el artículo del reglamento que le haga excepción.

Sr. Secretario. — Respecto de los asuntos despachados, no hay más disposición que la que acabo de leer.

—Se lee el artículo 134, como sigue:

«Podrá la Cámara acordar que se omita la lectura de alguna pieza oficial, por extensa o por cualquier motivo especial...»

Sr. Juárez Celman. — Ese no es: se refiere a los asuntos que entran a la Cámara y que, cuando son muy largos, puede el señor presidente mandar omitir la lectura.

Sr. del Valle. — Pido la palabra

Me parece que es conveniente poner la cuestión en su verdadero terreno.

La regla es que los proyectos han de leerse.

No hace mucho tiempo, en esta misma Cámara, el señor senador por Tucumán recordaba la importancia que la lectura de los proyectos tiene en la vida parlamentaria; recordaba que en todas partes del mundo todo proyecto pasa por tres lecturas, y recordaba también: cómo

estas tres lecturas están representadas entre nosotros, por aquella que se hace en el momento de la presentación del proyecto, por aquella que se hace en el momento en que se reparte para la orden del día y por aquella que se hace en la discusión en general; lecturas que tienen que hacerse, como regla, en días distintos.

Es verdad también que en muchos casos la Cámara prescinde de esta formalidad y suprime alguna de esas lecturas. Ese es el hecho y no puede desconocerse; pero no puede desconocerse tampoco el derecho de los senadores para pedir la lectura. No ha sucedido nunca ni hay ejemplo en la Cámara de que contra la opinión de una fracción de ella — casi de la mitad del número de sus miembros — se haya procedido sin leerse los proyectos materia del debate.

Me parece, pues, señor presidente, que aun cuando la Cámara pudiera, fundada en antecedentes, derogar la disposición ordinaria del reglamento, que manda la lectura de los proyectos, no puede ni debiera hacerlo en este caso, en que una gran fracción de la Cámara pide que se lea.

Respecto a la importancia que esto puede tener como táctica parlamentaria, para el debate que sostenemos, yo no sé, señor presidente, por qué se sorprende el señor senador por la Capital de que la minoría se defienda de la opresión moral de que es víctima en estos momentos. Lo natural es que se defienda, señor presidente, o se quiere que, sobre dominarnos con la mayoría, todavía nosotros nos prestemos voluntariamente y tendamos el cuello!

Esa es precisamente la situación en que se nos coloca, por el abuso del número en el caso presente.

Cuando las reglas parlamentarias, cuando los procedimientos de la Cámara se observan religiosamente por una y por otra parte, no hay lugar a ninguno de estos procedimientos: pero cuando se sale del reglamento una de las partes, entonces, señor presidente, viene la necesidad de colocarse por la defensa propia, en el terreno en que estamos colocados nosotros.

¡Por qué no hemos de declararlo! Estamos defendiéndonos, sí, de la opresión de que somos víctimas en este momento.

Por mi parte, lo declaro, nunca me aparto del reglamento de la Cámara, cuando soy mayoría; pero, cuando soy minoría y cuando la mayoría viene a colocarnos en la situación desventajosa en que nos pone, uso de todas las facultades que me acuerda el reglamento para defenderme. No salgo del reglamento de la

Cámara, porque, al oponerme a esta moción estoy dentro del reglamento y, al sostenerla, también estoy dentro de él: esa es la única valla que me detiene. No saldré de las reglas parlamentarias ni violaré el reglamento de la Cámara; pero dentro del reglamento, me defenderé con todas las armas que pueda.

Sr. Iriondo. — Como autor de la moción, me veo en la obligación de hacer uso de la palabra; para esto solicito del señor secretario que lea el artículo 94 del reglamento.

—Se lee el artículo 94 del reglamento que dice:

«Es igualmente cuestión de orden toda proposición verbal, cuyo objeto sea que la Cámara por algún motivo u ocurrencia especial, se desvíe respecto de algún asunto, de las disposiciones del presente reglamento, especialmente de las relativas a la introducción y tramitación de los proyectos, al orden de la palabra y al orden de la discusión.»

Sr. Iriondo. — Es respetando el reglamento y dentro del orden que él establece, que he hecho y sostengo mi moción.

El reglamento establece reglas generales para mantener el orden en la discusión, pero permite modificaciones siempre que sea por mociones apoyadas suficientemente y resueltas por la Cámara, sea para alterar el trámite ordinario que suelen llevar los asuntos, sea para omitir algunos de esos trámites, y lo que yo propongo es precisamente la omisión de uno de esos trámites: la lectura de un proyecto extenso, que estoy seguro que no es por curiosidad ni por amenidad que se pide.

Se dice que se está ejerciendo presión sobre la minoría y que ésta se defiende como minoría oprimida, y, por el contrario, vemos por la serie de mociones que se hacen, que es la mayoría la que debe considerarse oprimida.

Todo el mundo tiene derecho de hacer respetar los suyos, y así tenemos el derecho de pedir que se lea un proyecto que todos conocemos, pero no se hable de opresiones en el Senado. Hay apenas dos o tres senadores que faltan, difícilmente una cuestión ha tenido curso igual a ésta en este cuerpo.

Sr. del Valle. — Al hablar de opresión, lo hice exclusivamente a objeto de contestar al señor senador por la Capital, que nos increpaba nuestro procedimiento.

Sr. Iriondo. — Estamos, pues, dentro del reglamento, lo reconoce el mismo señor senador. No creo que esta cuestión se vaya a resolver hoy, no por cierto; pero es necesario ir ade-

lantando. Está en la conciencia de todos, repito, que no es por amenidad que se pide la lectura del proyecto.

Sr. Gómez. — Pido que se lea el artículo 153 del reglamento, que aclarará más este incidente.

—Se lee:

«Artículo 153. — A excepción del acta, comunicaciones y demás expresado en el artículo 135, nada escrito o impreso se leerá en la Cámara; pero ésta podrá, mediante resolución especial, conceder la excepción de esta regla que estime oportuno.»

Sr. Baibiene. — Hoy hice notar que se iba a fallar en una causa importantísima, sin oírse a una de las partes, cuyo abogado estaba ausente. Ahora hago notar que, no solamente se prescinde de ese requisito tan esencial al conocimiento y finiquitación de toda causa, sino que se quiere prescindir hasta de la lectura misma del proceso, lectura tanto más necesaria e indispensable, cuanto que el que la ha hecho una y mil veces para estudiar ese proceso y poderlo defender aquí, está ausente.

Hago notar todo esto.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra se votará: si se suprime la lectura en general del proyecto.

—Se vota y resulta afirmativa de 14 votos contra 12.

Sr. Presidente. — Está en discusión en general el proyecto.

Sr. Nougués. — La Comisión de Legislación, al tomar en consideración este asunto, se propuso ante todo, como cuestión previa, establecer el rol del Senado, es decir, la condición en que debía encararlo. Para esto era necesario conocer y determinar el origen de este proyecto y saber así, si esta Cámara era iniciadora o revisora.

Buscando todos los antecedentes de la cuestión, me encontré con un decreto del Poder Ejecutivo nacional fechado el 28 de Enero de 1881, por el cual se ponía en vigencia en el municipio la ley de educación común de la provincia de Buenos Aires, introduciéndole algunas modificaciones que se relacionaban con la organización de la comisión de educación y de los consejos escolares.

Este decreto se remitió al Senado, la Comisión de Legislación lo despachó aprobándolo y agregándole algunas otras modificaciones, con que lo aprobó esta Honorable Cámara.

pasándolo a la Cámara de Diputados. Esto tenía lugar el año 81 y pasó mucho tiempo sin que en esta Cámara se haya tratado de este asunto.

La Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Diputados se ocupó de él el 82 y presentó su dictamen, que dice:

Vuestra Comisión de Instrucción Pública ha estudiado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre educación primaria en la República, y por las razones que expondrá el señor miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente, en substitución de aquél.

Tratando de saber cuál era ese proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, he consultado todos los antecedentes oficiales que existen en la Cámara sobre este asunto y las relaciones que anualmente practican los secretarios de ambas Cámaras de todos los proyectos votados, y no he encontrado ningún proyecto posterior a quél que haya sido enviado al Senado. He repetido esta operación en la Cámara de Diputados, obteniendo el mismo resultado. He pedido datos a los señores senadores y diputados que han tomado parte en las discusiones habidas, tratando de averiguar a qué proyecto se referían; a las comisiones he preguntado si existía en sus carteras algún proyecto enviado con posterioridad, y todos los datos que he conseguido concuerdan con las relaciones impresas a que antes me he referido.

He examinado los archivos de la secretaría y en ellos tampoco existe proyecto alguno sobre la materia y hasta se me ha informado por un señor diputado, miembro de la Comisión de Instrucción Pública en la Cámara de Diputados, el doctor Demaría, que en el ministerio del ramo no existe copia ni constancia de proyecto alguno que se haya remitido a cualquiera de las dos Cámaras, con posterioridad al expresado decreto.

Por todos estos datos, se ve que la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Diputados no ha podido referirse, al tomar en consideración este asunto, sino al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo el 81, sancionado entonces por el Senado y pasado en revisión a la otra Cámara.

Ese proyecto no fué tomado en consideración por ella el año 82.

El año 83, renovada la Comisión de Instrucción Pública, presenta nuevamente su despacho, que dice: «La Comisión de Culto e Instrucción Pública ha estudiado el proyecto de ley de educación primaria en la República, y por las razones que expondrá el miembro informante,

os aconseja la sanción del siguiente, en substitución de aquél.»

Tanto los antecedentes que he compulsado, cuanto los datos que he obtenido, me han venido a persuadir de que en la cartera de la Comisión de Instrucción Pública no existía más proyecto que éste.

Por estas consideraciones, he creído que en el asunto de que se trata, el Senado es Cámara iniciadora, y que es necesario colocarse desde este punto de vista en la resolución que deba adoptarse.

En el seno de la Comisión se manifestaron algunas observaciones a este respecto.

Se hizo presente que la sanción del 81 fué en una ley de carácter interino, y que el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados en el 83, tiene el carácter de permanente; que el primero se destinaba solamente a la Capital y que el de la Cámara de Diputados tiene más extensión y comprende disposiciones que no se encontraban en el proyecto sancionado por el Senado.

Pero todas estas diferencias considero que no son substanciales y que no pueden venir a influir de una manera definitiva para cambiar el rol en que se encuentra colocada cada una de las Cámaras.

La parte fundamental del proyecto sancionado por el Honorable Senado en el año 81, es estableciendo la vigencia de la ley de educación común de la provincia de Buenos Aires para la capital de la República, y modificando algunas de sus disposiciones en cuanto se encontraban en oposición con las demás leyes nacionales y a la organización de la Comisión Nacional de Educación.

Esta es la parte fundamental del proyecto sancionado por la Cámara de Senadores.

La Cámara de Diputados ha aceptado el mismo pensamiento en general, y las modificaciones introducidas por la Comisión de Instrucción Pública no lo han variado en su fondo. Se aceptan en su mayor parte casi todas sus disposiciones.

Hay algunas diferencias de redacción muchas veces, pero en la parte substancial no hay divergencias entre uno y otro. Sólo hay diferencias de detalle, y una de ellas es que la sanción del Senado ponía en vigencia la ley en la capital y la Cámara de Diputados la establecía para la Capital, colonias y territorios nacionales.

Creo que la designación de la mayor o menor extensión que se dé a esta ley, no puede considerarse como una diferencia fundamental para tomar un proyecto como distinto de otro.

Si fuésemos a aceptar la teoría de que por- que se apruebe por el Senado un proyecto con relación solamente a la Capital, sea distinto de otro que se sancione más tarde por la Cámara de Diputados, extendiendo su vigencia a los territorios nacionales, resultaría que una Cá- mara podría arrebatarse a la otra su carácter de iniciadora con sólo modificar la extensión del proyecto.

Esta teoría es inadmisible.

Por estas consideraciones he creído que era indudable que la posición del Honorable Sena- do en esta cuestión está perfectamente definida y que no es ni puede ser otra que la de Cámara iniciadora.

Ahora, juzgando el proyecto de ley sancio- nado por el Senado en 1881 con relación al de la Cámara de Diputados sancionado por ella este año, se encuentra, como he dicho antes, mucha semejanza en la mayor parte de las dis- posiciones. Hay sus diferencias, pero ellas se refieren a disposiciones reglamentarias, que, por el mismo carácter que ellas tienen, las creo impropias de una ley de educación; creo que estarían mucho mejor reglamentadas por el Consejo de Educación.

Esas disposiciones reglamentarias tienen que ser transitorias y conformarse a las necesida- des que se presenten; podrían modificarse, po- dría dárseles una mayor extensión; pero, en fin, considero, repito, que es inconveniente es- tablecerlas en la ley, exponiéndose a que ella tenga que violarse en vista de que no se puede cumplir con todas las exigencias que establece.

Se establece también las jubilaciones o los retiros para los maestros de escuela.

Creo igualmente que esa disposición no tiene razón de ser en una ley, pues pienso que las pensiones, jubilaciones o retiros para los maes- tros de escuelas, deben dictarse al mismo tiem- po que las pensiones, jubilaciones o retiros pa- ra todos los demás empleados, puesto que todos realizan un servicio público igualmente meri- torio, según su graduación.

Por fin, lo que más ha llamado la atención ha sido la parte que se refiere a la educación religiosa.

Esta cuestión se ha tratado bajo diversas fases en la Cámara de Diputados, bajo su fase constitucional, su fase política, o bajo la fase de las conveniencias.

He estudiado, señor presidente, detenida- mente la ley de educación común vigente en la provincia de Buenos Aires; he tenido ocasión de observar que en la discusión que tuvo lugar en las Cámaras, principalmente del 75, forma- ban parte de ellas varios de los más distingui-

dos miembros de la comisión reformadora de la Constitución de dicha provincia; he se- guido con interés la discusión que aquí se pro- dujo; y al fin he tenido ocasión de corroborar- me en mi opinión, porque todo se concentraba en un punto fundamental, y esa circunstancia inclinó mi espíritu en favor de esta ley.

Pero antes de tomar una resolución defini- tiva, creí de mi deber, como miembro de la Co- misión, solicitar una conferencia, puesto que de educación pública se trataba, con uno de los empleados más caracterizados de la adminis- tración y que podía dar los datos más satisfac- torios sobre este punto.

Por ese motivo solicité la concurrencia del presidente de la Comisión Nacional de Escue- las, doctor Zorrilla. En presencia de los demás miembros de la Comisión, le hice varias pre- guntas. Entre ellas la de cuál era su opinión sobre la ley de educación común que estaba vigente en la provincia de Buenos Aires. Su contestación fué favorable, manifestando que sólo le encontraba algunos defectos, entre otros, que la inspección que se establecía por esa ley debía, en vez de facultativa, ser obligatoria; que sus deficiencias podrían salvarse perfecta- mente por medio de disposiciones reglamenta- rias del poder administrador.

Le pregunté también si los recursos con que estaba dotada la Comisión Nacional de Edu- cación, según la ley de Buenos Aires, eran bas- tantes para atender a las necesidades actuales y a las que pudieran notarse en el futuro. Ma- nifestó que eran no sólo bastantes por el mo- mento, sino que creía que muy pronto se en- contrarían Buenos Aires y aquellos puntos en que estuvo en vigencia la ley, en condiciones tan favorables que podría colocarse en situa- ción de ser modelo, no sólo en la República sino también en toda la América del Sur.

Por fin, señor presidente, se le preguntó qué dificultades había presentado en la práctica el artículo 2º, que se relaciona con la educación religiosa, y si en las escuelas de la provincia antes, y en la Nación ahora, había obstado a que pudieran concurrir niños cuyos padres per- tenecían a diversas sectas, y contestó que no había habido una sola queja, que ningún tro- piezo se había presentado en su aplicación.

Bien, señor presidente; después de haber examinado la discusión que tuvo lugar en la Legislatura provincial de Buenos Aires, en momentos en que se encontraba compuesta en gran parte de los miembros que habían formado su Constitución, sin que haya habido ninguna protesta, sin que se haya producido ninguna dificultad; cuando he visto que esa

ley ha estado en vigencia en la provincia durante nueve años y que a ella indudablemente se debe, como decía el presidente de la Comisión de Educación Nacional, el sorprendente estado de la educación primaria en la provincia de Buenos Aires, creo que no es prudente, que no hay razón alguna para que el Congreso venga a introducir modificaciones en una ley de educación que ha estado en vigencia durante tanto tiempo.

Creo que la modificación a las leyes sólo deben venir cuando se presentan grandes exigencias, grandes necesidades, es entonces cuando deben venir las modificaciones a llenar esas necesidades y exigencias.

El proyecto de ley remitido por la Cámara de Diputados, se aparta de todo lo que ha estado en vigencia, de todo aquello que respondía a nuestras costumbres, y que se encontraba establecido, no sólo por la legislación de la provincia, por lo dispuesto por el Senado, sino también por la ley de educación común, y no he encontrado razón fundamental que aconseje esa modificación.

Por estas consideraciones, he creído que debía presentar el despacho como lo he hecho, es decir, aconsejando que el Senado mantenga la sanción de 8 de Octubre de 1881, por la cual se puso en vigencia la ley de educación común de la provincia de Buenos Aires, con las modificaciones proyectadas por el Poder Ejecutivo, aconsejadas por la Comisión de Legislación del Senado y que fué pasada a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados.

Por consiguiente, la situación en que me encuentro es la siguiente: la Comisión en mayoría ha aconsejado la aceptación de todas las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, y la minoría de la Comisión aconseja el rechazo de ellas, manteniendo el Senado la sanción de 8 de Octubre de 1881, sin alteración.

No tengo más que decir.

Sr. del Valle. — Pediría al señor secretario se sirviera leer la nota de remisión del proyecto de ley que está en discusión y que ha venido de la Cámara de Diputados.

—Se lee.

Sr. del Valle. — Bien, señor presidente.

Yo necesito hacer dar lectura de la nota de remisión de la Honorable Cámara, porque es elemental en el derecho parlamentario que las Cámaras no se comunican entre ellas sino por medio de sus presidentes. Hay una forma

gráfica en el derecho parlamentario inglés, que demuestra cuál es la situación de la Cámara con relación a su presidente y de su presidente con relación a ella, para sus relaciones exteriores, y es ésta: el presidente son los ojos, la boca y los oídos de la Cámara.

Una Cámara no oye, no habla, no dice nada sino por medio de su presidente.

La palabra oficial de la Cámara de Diputados acaba de decirnos, pues, en qué situación nos encontramos.

¿Somos Cámara revisora? ¿Somos Cámara iniciadora? Esta ha sido una cuestión previa, presentada por el señor miembro informante de la Comisión en minoría, y que la ha resuelto en el sentido de que somos Cámara iniciadora, relatándonos, para fundar su opinión, hechos que ha recogido de la Secretaría de la Cámara de Diputados y de los labios de algunos señores diputados.

Sea cual fuere el mérito de sus informaciones, tenemos la palabra oficial del presidente de la Cámara de Diputados, que nos dice que nos envía «en revisión» este proyecto.

Todos los señores senadores saben que el proyecto que se envía en revisión es aquel de que es iniciadora la Cámara que lo remite. Por consiguiente, está establecido que, para la Cámara de Diputados, el proyecto que nos ha remitido ha sido originario de aquella Cámara, y que, asumiendo la actitud que nos aconseja la minoría, vamos a crear un verdadero conflicto entre las dos Cámaras, respecto a sus prerrogativas, por atribuirse el carácter de iniciadora en este proyecto.

El señor senador decía que al expedirse la Comisión de Instrucción Pública, en la Cámara de Diputados, sobre el proyecto general de educación, había procedido equivocadamente cuando decía que había estudiado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre educación primaria en la República; y agregaba el señor senador que aquel proyecto había sido presentado por la Comisión en substitución de aquel que primero sancionó el Senado, aprobando un decreto del Poder Ejecutivo sobre esta misma materia.

El precedente de la nota de la Cámara de Diputados ya es un hecho de la mayor importancia para el esclarecimiento de este punto. La palabra de la Comisión de la Cámara de Diputados que despachó aquel proyecto, es otro precedente. La Comisión de aquella Cámara, compuesta de los señores Sosa, doctor M. Navarro Viola, Mariano Demaría, doctor Lugones y doctor Pizarro, afirman que despachan un proyecto del Poder Ejecutivo, es decir, afirman

que toma conocimiento la Cámara de Diputados, por primera vez, de un proyecto de esta naturaleza sobre ley de educación y, por consecuencia, que es Cámara iniciadora en este asunto.

Uniendo estos antecedentes a la nota de remisión de la Cámara de Diputados, es decir, a la palabra de la Cámara de Diputados, me parece que no puede sustentarse absolutamente lo que decía el señor senador por Tucumán, invocando informes de carácter privado.

Pero estos antecedentes, señor presidente, se encuentran robustecidos todavía con la palabra autorizada del ex presidente de la Cámara de Diputados, doctor Miguel Navarro Viola.

El señor doctor don Miguel Navarro Viola acaba de publicar un folleto titulado *La ley de educación primaria ante el Senado Argentino*.

Este documento tiene para nosotros una doble autoridad, y debe tenerla para el Senado en este momento. En primer lugar, el señor doctor Navarro Viola acaba de bajar de la presidencia de la Cámara de Diputados, y los hechos a que se refiere han tenido lugar, en parte, mientras ha ejercido la presidencia, y mientras que la discusión de este mismo proyecto en su forma primitiva tenía lugar en la Cámara de Diputados, era miembro de la Comisión de Instrucción Pública el señor doctor Navarro Viola.

Si a esto se agrega la ilustración reconocida del autor del folleto, la labor misma que este folleto revela, puesto que en él se estudia no solamente la historia de la ley de educación, desde la Convención de Buenos Aires del 71, hasta la fecha, sino que se discute artículo por artículo, reforma por reforma, todas las que ha sufrido en las Cámaras de la provincia, por decretos del Poder Ejecutivo, por actos del Congreso, etcétera, se comprenderá que la palabra del señor Navarro Viola tiene una gran autoridad en este punto, y mayor aún si cabe por la circunstancia de que el señor Navarro Viola es un ardoroso e inteligente defensor de las ideas que defiende la minoría de la Comisión, y que en este momento yo combato.

Y bien, señor presidente; ¿qué dice el doctor Navarro Viola sobre este antecedente?

Nos cuenta cómo tuvo lugar la introducción de los diversos proyectos a la consideración de la Cámara, y en una de sus páginas dice lo siguiente:

«Pero me acabo de referir a un proyecto despachado el año pasado, que aunque casi igual al que ha sido materia de la discusión

este año, no es el mismo, y merece le consagre algunos recuerdos, como que es la continuación de una labor antigua, que tarde o temprano será tomada en cuenta para acordarle preferencia sobre creaciones del momento, sobre leyes nacidas como los hombres de Deucalión golpeando el suelo con el pie.»

«La Comisión de Culto e Instrucción Pública la formábamos el año pasado los doctores Pizarro, Demaría, Sosa, Lugones y yo.

Como el proyecto de ley pasado a ella por la Cámara, a la que lo dirigió el Poder Ejecutivo había sido formulado por el presidente del Consejo Nacional de Educación, el doctor Zorrilla, nuestra Comisión se reunía en su despacho, e independientemente de esto, concurría una parte de ella por la noche a la casa del doctor Zorrilla a preparar el estudio sobre los antecedentes de aquella administración...»

Entonces, pues, tenemos todos estos antecedentes que demuestran cuál ha sido la tramitación de este proyecto. Es un proyecto elaborado por la Comisión Nacional de Educación, remitido por ésta al Poder Ejecutivo, a la Cámara, por la Cámara a la Comisión, despachado por ésta en 1882 y reformado posteriormente en 1883. No hay intersticio, no hay confusión, no hay complicación por donde pueda venir a introducirse en lugar de este proyecto un proyecto de distinto género y del que me voy a ocupar en seguida, que fué sancionado por la Cámara de Senadores en 1881, me parece

Resulta, pues, con arreglo a los antecedentes oficiales y auténticos de la Honorable Cámara de Diputados, que aquella Cámara se ha considerado y se considera Cámara iniciadora en este asunto.

Veamos ahora, si a pesar de todo esto es posible aceptar la doctrina del señor senador por Tucumán, de que la ley que nos viene de la Cámara de Diputados, no importa sino una enmienda a la remitida por la Cámara de Senadores en 1881, me parece, y si por el hecho de haber sancionado aquel proyecto la Cámara de Senadores debe considerarse Cámara iniciadora.

Importa establecer qué significa el proyecto sancionado por la Cámara de Senadores en 1881. ¿Era una ley de educación? No. No se presentó en ese carácter en el seno de la Cámara por el Poder Ejecutivo; no se presentó en ese carácter en el seno de la Comisión; no fué traído en esas condiciones por la Comisión, ni sostenido en ese terreno por el miembro informante de la Comisión, ni combatido en ese terreno por los opositores a este proyecto.

La situación de la capital de la República, con relación a la educación, era en 1881 la siguiente:

Federalizada la capital de Buenos Aires y convertida en capital de la República todas sus instituciones pasaron a la Nación con el cuerpo de legislación que le pertenecía y que naturalmente debía continuar gobernándola.

El Poder Ejecutivo nacional comprendiéndolo así, declaró en vigencia aquella ley, que ni necesitaba declararlo, porque es regla en todas las mutaciones de continuidad legal de una parte de territorio que cambia de dominación o de jurisdicción para someterse a otro soberano, que ha de continuar con su cuerpo de legislación, mientras que leyes expresas del nuevo soberano no vengan a modificar su situación de derecho.

Regla tan absoluta e incontrovertible en casos como el actual, en que sólo se trata de transmitir del dominio de una provincia — parte de la Nación Argentina — al dominio de la Nación una ciudad que estaba incorporada antes a su territorio, no se quebranta ni aun en el caso de conquista en que ésta desmembra una nacionalidad, le arranca una de sus fracciones y la transmite a otra: ni aun en el caso de compra, ni de permuta de territorios, jamás se innova la legislación imperante sino en virtud de leyes nuevas dictadas por el soberano, entendiéndose que continúan incorporadas en la agrupación humana que se anexa a un territorio, todas las leyes que antes la gobernaban.

Así ha sucedido, señor presidente, en todos los casos de anexiones de territorios que la historia nos recuerda; así ha sucedido durante las guerras del primer Imperio, con todos los territorios que Napoleón I anexó a Francia; así ha sucedido en nuestros días con las provincias francesas que pasaron al dominio del Imperio Alemán, con motivo de la guerra franco-prusiana.

Y si necesitara antecedentes más autorizados, me permitiría recordar que hasta la fecha, la Luisiana, adquirida a Francia por Estados Unidos, está aún gobernada sin que en sus relaciones civiles rija la *Common Law*, que es regla para todos los Estados de la Unión Americana.

Entonces, la situación de derecho que la nueva Capital tenía con relación a la ley de educación, era ésta: pasaba a la Nación con su cuerpo de legislación, y, por consiguiente, con el Consejo General de Educación y con la ley que lo gobernaba.

Pero sucedió que al hacerse esta mutación, al hacerse esta transformación se encontró que había prescripciones de aquella ley, que no eran aplicables al gobierno de la Capital y surgieron necesidades en el gobierno de la educación nacional que no estaban previstas en la ley de educación de Buenos Aires, y fué con ese objeto que el Poder Ejecutivo declaró en vigencia la ley de educación de la provincia, para introducirle modificaciones; modificaciones que constan en el decreto de Enero 28 de 1881.

En el primer artículo de ese decreto, el Poder Ejecutivo decía: «Interin el Honorable Congreso provee por una ley especial a la educación común en el territorio de la Capital, continuarán vigentes en ella las instituciones escolares de la provincia, con las modificaciones que establece el presente decreto.»

Ahora bien, el Poder Ejecutivo dictó, pues, este decreto poniendo en vigencia la ley de la provincia con las modificaciones que la nueva situación aconsejaba, declarándola en vigencia mientras el Congreso no dictara una nueva ley de educación para la Capital; este asunto fué sometido a su aprobación por acto ejecutivo y el Senado lo consideró desde esta fase: ¿ha tenido facultad el Poder Ejecutivo para dictar este decreto? Y se reconoció sin contradicción por la Comisión que lo sostenía, por la oposición que lo combatía y debo creer que por la unanimidad casi de la Cámara que lo sancionó, que el Poder Ejecutivo no necesitaba poner en vigencia la ley de educación de la provincia de Buenos Aires que continuaba rigiendo necesariamente, pudiendo haber en el proceder del Poder Ejecutivo un acto superfluo, pero no un acto irregular.

La cuestión se concretó a las modificaciones que se introdujeron en la ley de educación de la provincia, y la Comisión nos aconsejó que la conducta del Poder Ejecutivo se aprobara, declarando expresamente que esto importaba un bill de indemnidad por la extralimitación de facultades que el Poder Ejecutivo hubiera cometido, obligado por las necesidades de la nueva situación, pero animado de los propósitos sanos y nobles que todo el mundo le reconoció.

Los opositores de esta ley proponían en sustitución, no algo que se refiriera a la ley de educación de la provincia, sino un decreto declarando que se desaprobaba la conducta del Poder Ejecutivo, lo que implicaba colocar la cuestión en su verdadero terreno; esto es, no se trataba en aquella discusión de dictar la ley que rigiera la educación de la Capital, sino de

aprobar o desaprobar un acto del Poder Ejecutivo.

Entonces, pues, con estos antecedentes, ¿cómo puede decirse que el proyecto que nos viene ahora a discusión viene como modificación de aquél?

Se trataba entonces solamente de aprobar un acto del Poder Ejecutivo, agregando algunas disposiciones que eran necesarias para la dotación de las escuelas, y ahora se trata de dictar la ley de educación.

Pero considero que se repite incorporado el proyecto sancionado por el Senado en la ley de educación de la provincia y que se diga: por lo mismo que se aprueba el decreto, desde que el decreto comprende la ley, en el nuevo proyecto se comprende también la ley de la provincia. Aun así, ¿qué dice el decreto? Dice que ínterin no se dicte la ley de educación, ha de regir tal o cual legislación. Crea una situación transitoria, excepcional, que en manera alguna limita las facultades del Congreso para venir a establecer de una manera permanente y definitiva cuáles han de ser las reglas que han de organizar la educación bajo el imperio de la legislación nacional.

Pero quiero suponer que el proyecto despachado por la Cámara de Senadores, hubiera sido materia de la deliberación de la Cámara de Diputados y que este proyecto hubiera sido rechazado.

Fíjense bien los señores senadores. En este proyecto se dice: apruébase el decreto del Poder Ejecutivo de tal fecha.

Yo pregunto a los señores senadores, para que me digan en verdad y en conciencia: si este proyecto hubiera sido rechazado en la Cámara de Diputados, ¿habría quién pensase que este rechazo era un óbice constitucional para que la Cámara pudiera ocuparse de la ley general de educación? Seguramente que no, y reconocer esto es reconocer que se trata de dictar una ley distinta; porque si no se tratara de dictar una ley distinta, tendríamos por delante el precepto constitucional que establece que todo proyecto rechazado en un año no puede ser materia de la deliberación del Congreso en el mismo período de sesiones.

Luego: si ha podido rechazarse aquel proyecto; si ha podido convertirse la aprobación en desaprobación, que es todo lo contrario, y asimismo dictarse la ley general de educación, quiere decir que no se trata de un proyecto que nos viene como enmienda de otro, sino que son dos proyectos completamente distintos.

Declaro, señor presidente, que no había pensado tomar parte en este debate; así es que

debe resentirse todo cuanto diga, de la falta de suficiente preparación para poder demostrar a mis honorables colegas lo que en mí es una convicción arraigada.

Pero de todas maneras, me parece que lo que he dicho basta para que el Senado se aperceba de que, no es, no diré exacto porque debo respetar tanto el juicio de los señores senadores como deseo que se respete el mío; pero sí diré que no es clara, que no es evidente la verdad de la doctrina sostenida por el señor miembro informante de la minoría de la Comisión: que es ésta una materia que reclama estudios serios, materia que no se había estudiado hasta este momento; que esta cuestión no se había considerado bajo esta fase y que las observaciones que he formulado bastan para arrojar dudas sobre la verdadera situación del proyecto que en este momento discutimos. Por último, creo que este proyecto, señor presidente, nos va a crear una situación difícil con la Honorable Cámara de Diputados.

Desde que ella se considera iniciadora, y nosotros también pretendemos ser iniciadores, si ni la Cámara de Diputados ni nosotros queremos renunciar a las ventajas que nos acuerda el hecho de ser iniciadores, vamos a venir a paralizar la acción de la ley, y con este peligro: que la vamos a paralizar no sólo para el presente sino para el porvenir; que pasarán muchos años antes de que este conflicto desaparezca; que sólo por la acción del tiempo puede desaparecer, pues no hay manera de resolver los conflictos entre las dos Cámaras, cuando ambas mantienen sus opiniones.

Entre la voluntad de una y de la otra, pretendiendo ambas tener los derechos y prerrogativas de Cámara iniciadora, no hay quien pueda decidir en nuestro régimen constitucional, a lo menos en nuestro sistema legislativo — hablo de la Nación — no hay manera de resolver el conflicto, y sólo el tiempo, cambiando las mayorías de las Cámaras, puede venir a dar resolución a esta cuestión.

La gravedad de este punto exige y aconseja que los señores senadores difieran al estudio de esta materia, lo que no han querido diferir por consideración a sus colegas; esto es: que se suspenda la sesión hasta un día próximo que se fijará, porque no creo que la Cámara esté preparada para este debate.

Por mi parte, declaro que no lo estoy, y no sé que pueda formar conciencia acabada sobre este asunto sin mayores estudios.

En estas razones fundo la moción que he formulado.

Sr. Avellaneda. — Nos encontramos, señor presidente, indudablemente, como acaba de decir con su fácil y galana palabra el señor senador que la deja, en presencia de lo imprevisto; no porque lo imprevisto sea grave y entrañe un grave problema, para la Cámara, sino simplemente porque era impensado.

Trátase, señor presidente, en este caso de hechos que son materiales, que son tangibles, y voy a estudiarlos en lo que se relacionan con esta Cámara, y en lo que se refieren a la Cámara de Diputados misma.

Tenemos un proyecto venido de la Cámara de Diputados cuya adopción nos aconseja la mayoría de la Comisión, y ante todo, tenemos que preguntar, ¿cuál es el origen de este proyecto en aquella Cámara?

Ante todo presento a la consideración del Senado este recuerdo.

Según nuestro reglamento, según nuestras prácticas parlamentarias, constantes, ninguna Comisión tiene iniciativa; nunca propone proyectos de ley por sí misma, sino que su misión se reduce a devolver a la Cámara los proyectos que ésta le entrega para su despacho. Nuestras comisiones, por nuestro reglamento, no proponen proyectos ni tienen iniciativa por sí, de suerte que tenemos ante todo que averiguar este hecho.

La Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Diputados presentó su proyecto de ley sobre el régimen escolar del municipio de Buenos Aires.

¿De dónde proviene, señor presidente, ese proyecto?

¿Cómo la Comisión* de Instrucción Pública de la Cámara de Diputados ha sido inducida a presentarlo? Sabemos ya por nuestras prácticas que no ha podido nacer de iniciativa suya. Si no ha habido pues, iniciativa suya, ha necesitado ser motivado por otro proyecto.

¿Cuál es ese otro proyecto? Vémoslo considerando literalmente los despachos de aquella Cámara.

Uno de ellos dice así: «La Comisión de Instrucción Pública ha estudiado el proyecto de ley de educación primaria en la República, y por las razones que expone el miembro informante...», etcétera.

Ahora bien; yo pregunto y se trata de este hecho que es material, ¿cuál es el proyecto que la Comisión tomó en consideración y que substituyó por aquel cuya sanción aconsejó a la Cámara de Diputados?

Nosotros decimos: sobre este punto no hay, no puede haber duda, porque no existe sino

un solo proyecto concerniente al régimen escolar en el municipio de Buenos Aires, es decir, un proyecto que tuvo procedencia del Poder Ejecutivo, que vino a esta Cámara, quedó sancionado aquí y pasó en seguida en revisión a la Cámara de Diputados.

Más aún; ese proyecto había sido precedido por otro anterior firmado por otra Comisión de Instrucción Pública que se descompuso en su personal por los cambios inherentes a las Cámaras.

Bien, pues: esta Comisión, despachando el mismo proyecto que no fué considerado en las sesiones del año anterior, volvió a decir: «Vuestra Comisión de Instrucción Pública ha estudiado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.»

Según nuestras prácticas, según reconocimiento y confesión de estas dos comisiones, había en la carpeta de la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Diputados un proyecto cuyo despacho urgía, y que la Comisión en dos años sucesivos se expidió sobre él, ya aprobándolo, desaprobándolo o haciendo enmiendas, y presentándolo así a la Cámara de que depende.

Ahora bien, ¿cuál era el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo? Era el mismo que había sancionado el Senado, porque ese proyecto de ley en su primer origen, había sido un decreto del Poder Ejecutivo poniendo en aplicación todo un régimen escolar con la institución existente en la provincia de Buenos Aires, y que debía continuar rigiendo en el municipio de Buenos Aires aun después de federalizado.

Ese decreto vino al Senado, y éste lo aprobó, y para aprobarlo hizo un proyecto. En este proyecto introdujo innovaciones trascendentales, tanto respecto al régimen escolar de la Capital, como en lo concerniente a las funciones y atribuciones de la comisión encargada de distribuir las subvenciones en el resto de la República para promover la educación popular.

Este proyecto pasó a la otra Cámara, y yo digo, señor presidente, que este proyecto es un hecho, que ese hecho no puede ser borrado, no puede ser suprimido, cualquiera sea la forma en que la Cámara de Diputados nos haya enviado este proyecto que no viene en revisión, sino que vuelve en realidad a la Cámara iniciadora.

El señor senador que deja la palabra ha emitido conceptos que no he podido apreciar bien en su sentido.

Ha dicho que en la rápida lectura que ha hecho de un folleto del doctor Navarro Viola,

ha visto que dice: «las palabras «Proyecto del Poder Ejecutivo» se referían a otro proyecto, no al enviado al Senado y remitido por éste a la Cámara de Diputados.

Perfectamente; acepto la discusión en este terreno, y mis raciocinios pasan entonces a ser mucho más perentorios.

Digo que la prerrogativa que el Poder Ejecutivo tiene para presentar proyectos de ley, es una de las más importantes, porque conjuntamente con el derecho de veto, le da su gran papel como colegislador.

Digo más; que esta prerrogativa, siguiendo nuestras prácticas parlamentarias y nuestro régimen constitucional, siempre ha sido ejercida por el Poder Ejecutivo del modo más perentorio y solemne, y jamás ha enviado un proyecto de ley sin acompañarlo del mensaje competente.

Ese mensaje debe haberse leído en la tribuna del señor presidente, y esa lectura es una de las tres que son requeridas como lo recordaba hace poco el señor senador por Buenos Aires para la formación de la ley según el derecho parlamentario.

Ahora bien; la presentación de un proyecto de ley no puede ser como el vólido del pájaro en el espacio, que no deja huellas.

La presentación de un proyecto de ley tiene naturalmente que ser reflejada en los documentos auténticos de la Cámara.

Si hubo un proyecto de ley presentado en una sesión, en el acta de esa sesión debe constar perentoriamente: vino un proyecto del Poder Ejecutivo sobre tal materia, se presentó y fué pasado por orden del señor presidente a la Comisión a quien incumbía su despacho.

Más aún: tras de las actas tenemos otro documento, aún más popular porque anda en manos de todos; tenemos los diarios de sesiones en que no sólo se da cuenta del hecho, sino que se insertan en toda su integridad los documentos.

De suerte que si hay un proyecto del Ejecutivo, presentado a la Cámara de Diputados, que no sea aquel a que el Senado se refiere, ese proyecto debe estar, pues, inserto en el Diario de Sesiones de aquel entonces.

Pues, yo digo, señor presidente, se trata de hechos materiales; hay un proyecto del Poder Ejecutivo; compruébese por el acta de la sesión en que se introdujo. Hay un proyecto de ley del Poder Ejecutivo en la mesa del señor secretario, publicado en el Diario de Sesiones y cuyo texto se conoce, porque él debe constar de un modo indefectible.

Sr. Zapata. — El señor senador se olvida...

Sr. Avellaneda. — Permítame; voy a seguir el desenvolvimiento de mis ideas; pero voy todavía más adelante en el desarrollo de mi pensamiento, sin perjuicio de responder a cuantas observaciones se hagan, porque, puesto que la jornada será laboriosa, estoy dispuesto a efectuarla pie a pie, hasta su completa terminación.

Decía el señor senador que el proyecto sancionado por el Senado no podía absolutamente confundirse con el proyecto venido de la Cámara de Diputados, porque se encuentran separados entre sí por dos líneas de todo punto insalvables. El uno es una ley de carácter normal y permanente y el otro es una ley puramente interina, puesto que el Senado dijo: «ínterin se sanciona una nueva ley por el Congreso, continuarán rigiendo en el municipio las instituciones escolares de la provincia de Buenos Aires».

Estoy, pues, en esta consideración que, bajo el aspecto jurídico en que se presenta, es la más fundamental en este asunto, y mi primera reflexión es la siguiente: ¿Dónde vamos a encontrar, en qué tratadistas, en qué principio de jurisprudencia encontramos esta diferencia, esta diversidad de caracteres y de formas en las sanciones y en las leyes, según las cuales se dividen en leyes interinas y leyes permanentes? Llámese interina, llámese permanente una ley, bajo ningún sistema de gobierno es una ley perpetua; tanto las leyes interinas cuanto las leyes normales y las leyes llamadas permanentes, jactándose tal vez de una inmortalidad que no tendrán, todas duran, única y exclusivamente, hasta que se revoca la ley que se llama permanente.

La ley que se llama permanente, lo mismo que la que se llama interina, tienen igual sanción, igual derecho de mandar e imponen las mismas obligaciones y obediencias.

Ahora bien, ¿qué significan todos estos calificativos con que se revisten ciertas leyes? Ellos no significan otra cosa sino la intención afirmada por el legislador de que se propone, una vez transcurrido cierto tiempo, entrar de nuevo en el examen de las leyes, verificarlas tal vez en presencia de los resultados obtenidos, confrontarlas con ellos, y entonces ver si conviene o no rectificarlas, modificarlas o suprimirlas.

Esto es únicamente lo que significa la palabra «ínterin». Pero, señor presidente, esta intención es independiente de todo punto de la ley. La ley, una vez dada, reviste su pleno

vigor, vive, se encarna en los hechos, independiente de todo punto, hasta de la intención misma con que el legislador la formuló. Por eso es que el gran Lovigny decía en uno de sus grandes aforismos de jurisprudencia: Sábese que todo legislador, como hombre, es dueño de sus actos, pero no es dueño de sus consecuencias.

Una vez dada la ley, su efecto es independiente del legislador y por más que haya dicho que es interina, por más que haya dicho en su intento que correrá poco tiempo la ley, ella depende de otras condiciones y puede ser que esas condiciones le den una vida mucho más larga que aquella que piensa el legislador.

Todas nuestras historias legislativas están llenas precisamente de estos ejemplos; ¡cuán voluminosos son los registros oficiales en nuestro país! Todas las épocas han tenido su legislación. La anarquía como el gobierno, la disolución de los pueblos como la unidad.

Pues bien; en este terreno tan cambiante, en este terreno con aspecto tan movedizo, yo me preguntaba mientras el señor senador hablaba: ¿cuál es la ley que ha tenido una duración más persistente? Pues bien, señor presidente; puedo dar precisamente la respuesta, porque he sido herido en mi atención más de una vez por la singularidad del hecho.

Señor presidente: la ley única que ha durado cuarenta o cincuenta años en la República Argentina es una ley sancionada por el Senado y que tiene precisamente como inscripción en su primer renglón este letrero: «ley interina»; es la reglamentación provisional de 1811, dada en defensa de la libertad de imprenta y que ha durado hasta el año 56 ó 57 en la provincia de Buenos Aires.

Y cuando salimos de nuestro terreno legislativo y descendemos todavía, por un examen más prolijo, a nuestro cuerpo institucional, allí todavía el ejemplo se presenta igualmente hiriente. ¿Quién no recuerda aquella Constitución del año 19 formada con tan altas vistas de patriotismo y con tan penosa elaboración durante tres años? Pues bien: esa Constitución apenas promulgada se perdió en el tumulto y en la disolución del año 20. La Constitución del año 26, que llevaba sobre sí el prestigio del gobierno presidencial de Rivadavia, no alcanzó siquiera a su proclamación en la provincia. Entretanto, señor, está la Constitución de Mayo, la Constitución de 1853, que fijó felizmente para siempre los destinos del pueblo argentino.

¿Cuál había sido la Constitución de carácter nacional que había tenido más vigencia en el territorio argentino? Acabamos de ver que no fué la de 1818, ni la del año 26; pues bien: fué el reglamento de 1817, que duró desde el año 17 hasta el año 20 y que tuvo, en medio de aquella época llena de tormentos y vicisitudes, tan larga duración comparativamente, precisamente porque fué llamado un reglamento provisional.

Queda, pues, señor presidente, con esto demostrado que decir de una ley que es interina, decir de una ley que es permanente, en nada cambia en su fondo ni en su forma.

Que por lo tanto, el proyecto sancionado por el Senado en 1881 y que vuelve como idea y como principio fundamental a dar una legislación para el régimen escolar en Buenos Aires, subsiste virtualmente y del modo más expreso, en la nueva ley que nos viene de la Cámara de Diputados, puesto que el objeto de ambas leyes es precisamente dotar con una ley el régimen escolar; y una vez salvado este objeto, el miembro informante de la minoría de la Comisión tiene razón perfecta para decir que la Cámara de Diputados no ha hecho otra cosa sino substituir el proyecto del Senado por el otro que viene en seguida a ser considerado. Pero el lenguaje del miembro informante de esta Cámara se encuentra, por otra parte, en conformidad con la moción misma que introdujo el despacho en la Cámara de Diputados, cuando dice: «en substitución del proyecto que la Comisión tiene en su carpeta» y que, según se acaba de demostrar, no era ni podía ser otro que el que el Senado había enviado.

El señor senador por Buenos Aires nos ha hecho extensas consideraciones para demostrar lo que no estaba en tela de juicio, que no es controvertible y lo que yo acepto desde luego. El señor senador por Buenos Aires nos ha dicho: cuando hay mutación de soberanía en un territorio, cambia únicamente el gobierno político; la sociedad no se disuelve; todas aquellas instituciones que afectan el orden, el régimen, la justicia, la seguridad de la sociedad quedan subsistentes bajo el nuevo imperio de la nueva forma. No puede ser efectivamente más sensata la doctrina, más correcta ni más justificada por numerosos ejemplos, como los que el señor senador ha expuesto; pero esas doctrinas, aplicables al caso presente, sugieren al contrario un argumento que se presta a contrariar el suyo. ¿Qué prueba más

acabada pueden dar el Senado y el Poder Ejecutivo, el uno al aprobar y el otro al presentar su decreto, de querer dar una ley nueva, es decir, sacar del Estado de Buenos Aires la ley provincial y revestirla con el carácter propio de una ley nacional, actualmente vigente en la provincia de Buenos Aires? Precisamente el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, al someter su decreto al Senado y el despacho del Senado dicen: quiero que ésta sea ley de la Nación. Precisamente para que continuara rigiendo, no se necesitaba esa sanción, y por lo tanto la presencia de esa sanción lo que significa es esto: que quiere que la ley salga de la esfera de la legislación provincial. No es un acto de transmisión, sino un acto legislativo, pues se incorpora a la legislación nacional.

Por último, señor presidente, yo me concreto a estos términos capitales: hay un proyecto de ley despachado por el Senado; este hecho es indiscutible y no puede ser variado. La Constitución, al formular la tramitación de las leyes, dice terminantemente: Un proyecto despachado por una de las Cámaras pasa a la otra, y como ese precepto constitucional no puede ser vano ni puede ser nulo, impone a la otra Cámara la obligación ineludible de tratarlo. Entonces, pues, estando la Cámara de Diputados llamada por ese proyecto a tratarlo según los términos constitucionales, debemos suponer, a no ser que mediasen pruebas en contra y hechos ostensibles de una verdad matemática, que ese proyecto es el que toma en consideración para tratarlo, prueba que ha venido en nueva revisión.

Creo que con estas observaciones se contestan todos los diversos puntos abarcados por el señor senador en su discurso.

Sr. Zapata. — Yo creo, señor presidente, que estaba en discusión la moción hecha por el señor senador del Valle, para que se levantara la sesión. Fué apoyada y puesta en discusión por el señor presidente; por eso me permití llamar la atención del señor senador, para que no hiciera un discurso fuera de tiempo. Deseo saber si es exacto que está en discusión la moción del señor senador.

Sr. Presidente. — Está.

Sr. Zapata. — Creo entonces que no puede continuarse pronunciándose discursos sobre el fondo del asunto, sino sobre la moción.

Sr. Presidente. — Había hablado el señor senador del Valle para fundar su moción. Tenía que hablar también el señor senador que la pidió. Habiendo terminado ya, voy a poner a votación la moción del señor senador del Valle.

Sr. Bayo. — ¿Cuál es?

Sr. Presidente. — Que se suspenda la sesión.

Sr. Juárez Celman. — Se ha declarado ya que no ha de haber sesión permanente; por lo tanto, siendo la hora avanzada, podría levantarse la sesión.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Así se hace y resulta negativa contra 12 votos, habiendo 27 señores senadores.

Sr. Presidente. — Continúa la discusión.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pido la palabra.

Sr. Cambaceres. — Permítame un momento el señor ministro. El señor miembro informante de la mayoría de la Comisión, se encuentra aquí: Creo que está el proyecto en discusión en general y él podría informar.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — No tengo inconveniente. Una de las cosas que iba a decir es ésta: que me tomaba de sorpresa la discusión; que no tenía la preparación conveniente para hablar delante de la Cámara de Senadores; que tenía motivos para haber dudado de que hoy se tratara la cuestión, cuando uno de los distinguidos miembros de esta Cámara hizo moción en una sesión anterior para que este asunto fuera tratado el jueves. Esto me induce a creer que la Cámara no estaría en disposición de tratar esta cuestión hoy día.

Pero después he visto, señor presidente, que prescindiendo de todos los trámites necesarios para la ilustración de la Cámara en una materia tan difícil, tan seria y a la cual, no sólo la República Argentina en estos momentos consagra su atención, sino también el mundo entero, la Cámara estaba dispuesta a prescindir hasta del informe del miembro informante de la mayoría de la Comisión.

Este procedimiento no ha podido ser ni sospechado, y por consiguiente, declaro que veo con satisfacción la llegada del señor miembro informante de la Comisión, porque considero de gran importancia su informe en este caso. El informe de la minoría no ha podido ser satisfactorio para la Cámara; primero, por su exigüidad; segundo, por no haber tocado los puntos principales que forman la base de esta cuestión; tercero, por haberla encarado bajo un solo punto de vista; y cuarto, porque en todo despacho de Comisión, aunque sean iguales los informes de la minoría y de la mayoría, en realidad, siempre pesa más el informe de la mayoría, y es el que toma primero en consideración la Cámara.

Así, señor presidente, veo con gran satisfacción que uno de los errores en que creía que iba a incurrir esta Cámara al prescindir del informe de la mayoría de la Comisión, será salvado.

Cedo, pues, la palabra al señor miembro informante de la Comisión, si el señor presidente se la concede.

Sr. Baltoré. — Pido la palabra.

—Manifestaciones de aprobación en la barra.

Sr. Gómez. — Hago moción para que sea despojada la barra.

—Apoyado.

Sr. Gómez. — No se puede estar, señor presidente, bajo la presión de muchedumbres que vienen a ejercerla sobre el ánimo de los señores senadores.

—Silbidos y señales de desaprobación en la barra.

Sr. Gómez. — No me importan esas manifestaciones ni me van a asustar; al contrario, me ratifican más en la moción de que sea despojada la barra.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Habiendo sido apoyada la moción del señor senador, está en discusión.

Sr. del Valle. — Creo que no debe discutirse. Hay un artículo del reglamento que autoriza al señor presidente para mandar desalojar la barra cuando ésta falte al orden.

Sr. Presidente. — Pasaremos a un cuarto intermedio, para mandar despejar la barra.

—Se pasa a cuarto intermedio, y vueltos a sus asientos pocos momentos después los señores senadores, continúa la sesión sin barra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos, doctor Baltoré.

Sr. Baltoré. — Ante todo, señor presidente, siento la necesidad de dar una explicación al Senado respecto de mi ausencia de este recinto.

Algunos amigos me informaron que esta cuestión no debía tratarse en esta sesión, y que, en caso de que se tratara o se intentara hacerlo, ellos harían la moción necesaria para su aplazamiento hasta el sábado. Ninguna dificultad

tuve en creer esta versión, porque en una de las sesiones anteriores, se había votado que debía tratarse el martes o el jueves. Yo voté entonces con los que votaron porque se tratara este asunto el jueves, es decir, por el aplazamiento. En seguida se resolvió que no se le daría prelación en el orden de la discusión, y puesto que había orden del día número 31, siendo ésta el número 32, debía comenzarse por la anterior.

Me encontraba enfermo, señor presidente, y lo estoy al presente. Todas estas consideraciones me hicieron creer que no se trataría hoy este proyecto. Más aún, es práctica en esta Cámara y creo que en todas, que en los casos en que el miembro informante de la Comisión no pueda presentarse por cualquier razón, no se trate el asunto. Así se ha hecho aquí repetidas veces, por la simple insinuación de cualquier señor senador.

Los antecedentes y los hechos que dejo referidos, me dieron la seguridad de que este asunto no se trataría en esta sesión, y es por esta razón que no he venido desde el principio de ella a cumplir con mi deber y a estar al lado de mis amigos.

Se me acaba de avisar que el asunto se trataba, que la discusión estaba avanzada, y que mi presencia era necesaria.

Inmediatamente he concurrido. No creí que llegara el caso de informar, pues me dijeron que ya se había dado el informe de la minoría de la Comisión. Entonces no creí necesario traer las apuntaciones que debían ayudarme a desempeñar mi cometido.

En esta situación, voy a apelar a la hidalguía del Senado, pidiéndole que, por las consideraciones expuestas, y por las circunstancias especiales en que me encuentro, quiera postergar la consideración de este asunto hasta la sesión de mañana, en la que presentaré mi informe.

Sr. Gómez. — ¿Hace moción el señor senador?

Sr. Baltoré. — Sí, señor.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Está en discusión la moción del señor senador.

Sr. Iriondo. — Se ha sancionado ya que no se postergue la discusión del asunto; de manera que esta moción es contraria a la anterior.

Sr. del Valle. — Esta no es una sesión permanente. Si el Senado hubiera resuelto que lo fuese, no podría postergarse la discusión de este proyecto; pero no siendo permanente, no me parece que haya inconveniente.

Sr. Gómez. — Sobre todo la hora es muy avanzada.

Sr. Baltoré. — Podría pedirse el recinto para mañana: entonces estaré dispuesto y preparado para informar.

Sr. Presidente. — Se va a votar si se aprueba la moción del señor senador por Entre Ríos, de suspender la sesión para continuarla mañana.

—Se vota y resulta negativa de 14 votos contra 13.

Sr. Presidente. — Continúa la discusión.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pido la palabra. No he oído la indicación que ha hecho el señor senador; pero creo que ha pedido la suspensión de la sesión hasta mañana por no poder informar. Sin embargo creía que, habiendo resuelto la Cámara continuar la sesión, el señor senador informaría. Debo comunicarle al señor senador que no he estado presente en la Comisión cuando ella se ocupó del asunto; que la Cámara de Senadores no ha oído leer el proyecto de educación y que no ha oído un informe completo respecto a los fundamentos que pueda tener tanto la decisión de la mayoría como la decisión de la minoría. Por esto consideraba de la más grande importancia el informe del señor senador, por esto también le rogaría que tuviera a bien exponer a la Cámara los motivos que han obligado a la mayoría de la Comisión a aceptar el proyecto cuya sanción aconseja.

Sr. Baltoré. — Pido la palabra.

Después de la resolución del Senado, yo creía inútil entrar a informar de una manera imperfecta, puesto que, para hacerlo, me veo privado de los documentos que podían auxiliarme en esta tarea, tarea que, debo confesarlo, es fuerte para mí; pero si el señor ministro insiste sobre la necesidad de ese informe, voy a manifestar algunas de las razones principales que la Comisión tuvo para aceptar el proyecto que se discute.

Pido la benevolencia de los señores senadores para este informe, que, repito, tiene que ser completamente imperfecto, porque me faltan los apuntes o anotaciones que había hecho para informar a la Honorable Cámara.

Sr. Juárez Celman. — Yo haría moción para que se le permitiera al señor senador ir a buscar los informes que le hacen falta, haciendo entretanto un cuarto intermedio.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Estando apoyada la moción, si no se hace uso de la palabra se votará.

—Se vota y resulta negativa de 13 contra 14.

Sr. Baltoré. — Continúo con la palabra.

Decía, señor presidente, que me sería difícil dar el informe que deseaba el señor ministro de instrucción pública, por las razones antes manifestadas; sin embargo, expondré concisamente y a grandes rasgos, en todo cuanto me sea posible, las razones del dictamen que se discute.

La ley de educación de la provincia de Buenos Aires, que ha servido de modelo al proyecto que se discute, es una ley importante y que ha dado los mejores resultados en la provincia de Buenos Aires y en la Capital. Con razón, entonces, los que han confeccionado este proyecto han tomado gran parte de sus disposiciones.

Es aquélla, una ley acreditada por la experiencia, y cuyos resultados tocamos en la ciudad de Buenos Aires, donde las escuelas se encuentran florecientes, lo mismo que en la provincia toda. Sin embargo, el proyecto en discusión contiene reformas y avanza de una manera tal, con tanta evidencia sobre la antigua ley, sobre la ley vigente por resolución del Senado, que la Comisión no ha podido menos que aceptarla desde luego.

Voy a enumerar someramente las diferencias entre el proyecto y la ley de la provincia de Buenos Aires.

Desde luego comienza este proyecto por definir los propósitos de la educación común, el pensamiento que entraña la ley, lo que el gobierno se propone al educar a la juventud en sus escuelas, y esta reforma para mí es de capital importancia y se relaciona con el detalle que contiene. La ley establece el mínimo de la educación, y también la inspección de una manera formal y ordenada, como no existía antes, dándole jurisdicción para penetrar en todas las casas de educación; se ha colocado esta ley, puede decirse, arriba de todas las cabezas.

Tenemos, entonces, que los rumbos que el proyecto atribuye a la enseñanza primaria, el detalle del mínimo de la educación y la inspección en las condiciones establecidas, vienen a formar un todo, que nos ofrece los resultados más espléndidos para el país. Yo entreveo en estas disposiciones el propósito elevado de formar la juventud argentina en un orden de

ideas altamente conveniente, yo comprendo que todo esto responde a necesidades palpitantes que el país siente, que todo esto tiende a resolver problemas que ya golpean nuestras puertas.

País nuevo y de escasa población, necesita buscarla en Europa civilizada; de allí nos viene la inmigración diariamente; nosotros la solicitamos y esperamos que cada día aumente el contingente de los extranjeros que han de venir a aumentar la población de nuestras ciudades, a poblar nuestros hermosos campos y a hacer de esta República lo que debe ser: una de las primeras de Sud América.

Entretanto, esos elementos que nos vienen del exterior son elementos que no los puede asimilar nuestra débil civilización.

Ya es un problema éste que preocupa a los poderes públicos y a los hombres que piensan sobre esta materia: cómo hemos de hacer nosotros, cómo hemos de asimilar a este país los elementos que nos vienen del extranjero.

Yo creo que la manera más adecuada, que la manera más segura de resolver este problema sin conmoción, sin violencia, es la organización de la educación común tal cual la establece esta ley.

Por eso he dicho, señor presidente, que esta ley al fijar los rumbos que ha de tener la educación común y establecer la inspección de la manera ordenada que la establece, al hacer efectiva esta ley, al extender la jurisdicción dando acción de penetrar en todas las casas de educación, garantiza de una manera eficaz la resolución de este problema.

Por lo demás, señor presidente, no recuerdo en este momento que haya ningún punto capital en esta ley.

Tenemos el fondo de escuelas que está establecido ya por la ley vigente, pero que esta ley le ha dado mayores recursos y mayores medios, entonces, de hacer prosperar la educación en la República.

Tenemos algunas otras disposiciones también, muchas de las cuales están contenidas en la ley vigente y que no debe hacer mención y extenderme en sus detalles puesto que los señores senadores que se han preocupado de este asunto y han hecho un estudio comparativo de una y otra ley, habrán notado mejor que yo sus disposiciones concordantes, así como las ventajas que ofrece el proyecto en discusión.

Yo creo, señor presidente, que no sería sincero, que no sería franco en este informe, si no dijese una palabra, aunque sea en general, respecto al artículo 2º de la ley vigente y al artículo 8º del proyecto que se discute.

No me doy cuenta, señor presidente, de una manera clara y precisa de los motivos por que estos artículos han servido de fundamento a la discusión ardorosa a que ha dado lugar esta ley; sin embargo, reconozco el hecho y repito, entonces, que me creo obligado a dar, aunque sea en general, en dos palabras, los fundamentos que ha tenido la Comisión en mayoría para decidirse por el artículo 8º del proyecto que se discute.

El artículo 2º de la ley vigente dice... No tengo a la mano la ley de la provincia de Buenos Aires ni ninguno de los documentos que sería necesario consultar en este momento para ser preciso. Tengo, entonces, que valerme de mi memoria, que no es grande, para las referencias que voy a hacer.

—Los señores senadores Avellaneda e Igarzábal se levantan de su asiento y ofrecen al orador los documentos a que se había referido, y continúa éste en seguida:

El artículo 2º dice lo siguiente:

«Los padres, tutores o personas en cuyo poder se encuentren los niños residentes en el territorio de la provincia y que reúnan las condiciones enumeradas en el artículo 3º, están obligados a darles el mínimo de instrucción, que de tiempo en tiempo fijará el Consejo General de Educación; considerando tanto los recursos y necesidades peculiares de cada localidad en razón de sus condiciones económicas, cuanto la necesidad esencial de formar el carácter de los hombres por la enseñanza de la religión y de las instituciones republicanas. Es entendido que el consejo general está obligado a respetar en la organización de la enseñanza religiosa las creencias de los padres de familia ajenos a la comunión católica.»

Como se ve por esta lectura, la ley encomendaba al Consejo de Educación, como a las escuelas, la enseñanza religiosa.

Es un hecho: esa enseñanza religiosa se ha dado en una parte mínima según su programa, extendiéndose muy especialmente sobre la enseñanza de la moral que comprende casi todos los grados que se estudian en las escuelas; esta es, a mi juicio, la parte dispositiva y la manera como la Comisión ha entendido este artículo.

Pasamos al artículo 8º del proyecto que se discute.

Este artículo en manera alguna excluye la enseñanza religiosa y establece, como el Senado lo sabe, que ella puede darse antes o después de las horas de clase: ni uno ni otro, pues, excluye la enseñanza religiosa. De aquí mi sor-

Agosto 28 de 1883

CAMARA DE SENADORES

43ª Reunión. 41ª Sesión ordinaria

presa al ver levantarse la discusión que se ha suscitado con motivo de esta ley.

En ninguno de los artículos está excluida la enseñanza religiosa. La Comisión ha creído que tal cual está redactado el proyecto consultaba mejor las necesidades y las exigencias de la escuela y que estaba más en armonía con el espíritu de nuestras instituciones republicanas.

Ha creído que de esta manera se ofrece en la escuela un ejemplo práctico del respeto que la ley debe tener por la conciencia de los maestros, por la conciencia de los padres y por la conciencia de los niños; que al respetarlos de esta manera se les enseña a respetar la conciencia ajena y la conciencia propia.

Estas son las consideraciones que la Comisión en mayoría tuvo en cuenta para decidirse por el artículo 8º del proyecto que se discute.

Debería concluir, señor presidente, haciéndome cargo de la cuestión provocada por el informe de la Comisión en minoría, pero como he llegado tarde a este recinto, creo inútil ocuparme de ese asunto.

Voy a terminar con dos palabras. Debo manifestar mi sentimiento por no haber podido informar en este asunto con todo el acopio de datos que yo hubiera deseado, y también por no haber podido informar con la extensión que el asunto merece, y con la preparación que habría necesitado para cumplir con mi deber, para acercarme siquiera a la altura de la cuestión y muy especialmente cuando me constaba que distinguidos oradores del Senado debían terciar en este debate.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Son notorias las desventajas con que entro a esta discusión.

Puede decirse que la sanción de la Cámara está hecha y aunque no soy amigo de prejuzgar, siguiendo el ejemplo de algunos señores senadores, creo que en este caso me es permitido pensar que cuanto voy a decir será inútil. Cuando veo a ilustradas inteligencias negar la evidencia de los hechos, debo desesperar de llevar al ánimo de los señores senadores que han opinado y de los que han votado con los que han opinado, demostraciones que tengan alguna eficacia.

Sin embargo, estas demostraciones quedarán escritas en las actas del Senado, podrán ser consultadas alguna vez fuera de esta atmósfera candente, en virtud de la cual se agitan pensamientos que no siempre están sellados con el sello de imparcialidad que debe tenerse en estas cuestiones, y es con el ánimo precisamente de dejar establecidas en las actas estas ideas, ideas relativas a muchos puntos, por-

que no veo tampoco que el fondo de la cuestión sea encarado ni tratado con la importancia que yo le atribuyo y que le ha atribuido la Cámara de Diputados; es con este ánimo, digo, que tomo la palabra.

Se ha enunciado una cuestión que puede considerarse previa: la cuestión de si esta Cámara es o no iniciadora.

Esta es una cuestión de hecho y puede resolverse con los documentos en la mano.

Me parece conveniente tomar una frase del señor senador por Tucumán, que felizmente puede revertirse en contra de él; una de esas frases que con frecuencia pronuncia, que han recibido el título de gráficas y alrededor de las cuales puede hacerse muy bien una cuestión.

Sr. Avellaneda. — ¿Trágicas ha dicho el señor ministro?

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — No, señor; gráficas; pero quizá le convendría el otro adjetivo.

Sr. Gómez. — Yo creo que es la cuestión previa de si esta Cámara es o no iniciadora, la que está en debate.

Sr. Juárez Celman. — No se ha hecho moción en ese sentido.

Sr. Gómez. — Si no se ha hecho, yo la hago: de que resolvamos si el Senado es o no Cámara iniciadora.

Sr. Juárez Celman. — Apoyado.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Yo entendía que la cuestión estaba tratándose en general y que uno de los incidentes era éste: si esta Cámara debía considerarse como iniciadora o no e iba a contestar a las observaciones hechas por el señor miembro informante de la minoría de la Comisión, repetidas y extendidas por el señor senador por Tucumán.

Sr. Gómez. — Eso fué lo primero que se trató y sobre eso versó el discurso del señor senador por Buenos Aires doctor del Valle, pero la cuestión no se ha resuelto todavía.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Bien; continúo.

El señor senador decía con suma insistencia que nada sucedía en la Cámara que no fuera oficial; que nada pasaba sin dejar su rastro; que nada entraba allí sin que constara en los documentos de que hacen uso las Cámaras; sin que fuera escrito en el libro de sesiones presentado al presidente, leído ante la Cámara, etcétera.

Es precisamente porque creo lo mismo que el señor senador, que insisto en sostener que la Cámara de Senadores no es iniciadora de

la ley que se ha discutido en la Cámara de Diputados y que ésta ha mandado en revisión al Senado.

Es con documentos en la mano que voy a tener el honor de demostrar a la Cámara cómo ella no es iniciadora de este proyecto.

En efecto: no hay que olvidar un solo detalle de este raciocinio.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto pidiéndole su aprobación para un decreto que había expedido.

¿Qué decía ese decreto? Pónese en vigencia la ley de educación de la provincia de Buenos Aires con tales y cuales modificaciones.

El señor senador del Valle ha hecho un recuerdo muy oportuno, señor presidente: ha mencionado una idea que si bien es conocida por muchos, conviene tenerla presente porque a veces por una simple omisión pueden resultar equivocaciones.

Ha dicho: Cuando una comarca pasa a otro dominio, pasa con sus leyes, con sus usos y esas leyes no son alteradas sino en virtud de sanción expresa del soberano que venga a modificarlas.

Esto es admitido por todos y se ha mencionado hasta el hecho de las conquistas mismas, que son las que dan más derechos, según parece: la conquista misma respeta, como ha dicho el señor senador, las leyes vigentes en los pueblos conquistados, mientras no se cambie la legislación.

Sr. Avellaneda. — En el orden social.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — En el orden social. No hay otro orden. ¿A cuál quiere que me refiera el señor senador?; ¿al orden orgánico o al angelical? (*Risas*).

Si el señor senador desea interrumpirme, confieso que me agrada; no me ha de perturbar.

Sr. Avellaneda. — Ya sé que le gusta y lo he hecho por complacerlo.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — En el orden social, pues, como dice el señor senador, quedan en vigencia las leyes que no han sido derogadas.

Ahora bien: cuando pasó la ciudad de Buenos Aires a ser capital de la República, pasó con todas sus leyes que continuaron rigiendo y una de ellas era la ley de educación común de la provincia de Buenos Aires.

Pero esa ley no podía ser aplicada a la Capital en todos sus detalles, era necesario restringirla, modificarla. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se había dictado para la provincia y ahora se quería aplicar a la Capital. En-

tonces se dejó subsistentes las leyes que habían regido en la provincia para la ciudad y eso le obligó a dictar el decreto cuya aprobación pidió ese año al Congreso, diciendo sencillamente que la ley no era aplicable a la capital, por haber sido dada para la provincia y lo que pedía el Poder Ejecutivo era sólo la aprobación de las modificaciones más indispensables que había reclamado la ley para su aplicación en la Capital.

La ley no podía variar como en todas las demás reparticiones, siempre que no hubiera habido una exigencia, una necesidad imperiosa.

Las leyes de la provincia han continuado subsistiendo y en las partes que han existido modificaciones, se han modificado, y para eso ha pedido el Poder Ejecutivo autorización al Congreso.

Si no hubiera habido necesidad de esa modificación el Poder Ejecutivo, que por sí mismo no puede dictar leyes para la Capital, puesto que es el Congreso a quien le compete hacerlo, no habría tocado la ley de educación ni habría puesto en vigencia tal ley, porque es evidente que ella no habiendo sanción en contrario continuaba rigiendo en el municipio.

Se explica, pues, la razón que tuvo el Poder Ejecutivo para hacer modificaciones, y como no tenía facultad para ello, pidió la aprobación del Congreso de la ley que debía poner en vigencia con sus modificaciones.

El proyecto fué enviado al Senado; en éste se discutió si se aprobaba o no el decreto del Poder Ejecutivo. No fué discutida la ley de educación.

Después de un debate que versó únicamente sobre la aprobación del decreto del Poder Ejecutivo, el Senado sancionó una ley que decía lo siguiente: Apruébase el decreto del Poder Ejecutivo poniendo en vigencia la ley de educación de la provincia, mientras se dicta la ley de educación común de la República.

Ese fué el proyecto que sancionó el Senado y que fué enviado a la Cámara de Diputados.

Esta estudió la ley de educación en 1882. En 1883 volvió a estudiarla y si hubiera modificado la sanción del Senado, ¿sobre qué habría versado la modificación?

El proyecto del Senado decía: Apruébase el decreto del Poder Ejecutivo, y entonces la Cámara de Diputados habría tenido que decir: no se aprueba, o apruébase con tales y cuáles modificaciones, refiriéndose a la substancia del proyecto, que era únicamente la aprobación del decreto.

Pero ni la Cámara de Diputados, ni las comisiones, ni ninguno de los diputados, ha men-

cionado siquiera con la intención de que en su mención sea formal, el tal decreto aprobado por la Cámara de Senadores y para que no se dude de lo que digo, tengo aquí los dos despachos de la Comisión anterior cuyo texto es terminante. No se puede sostener de una manera que merezca aceptación, lo que sostienen el señor miembro informante de la minoría de la Comisión y el señor senador por Tucumán, que siento no esté presente en este momento, porque no podría negar la afirmación que hago en virtud de lo que voy a leer.

La orden del día número 40, de la Cámara de Diputados, dice:

«Vuestra Comisión de Instrucción Pública ha estudiado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo...»

No habla absolutamente del Senado.

«... sobre educación primaria en la República; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente en substitución de aquél.»

Muy bien.

En la Cámara de Diputados en el año 83, dice la Comisión de Culto e Instrucción Pública, «ha estudiado el proyecto de ley de educación primaria en la República y por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente, en substitución de aquél».

Ninguno de los dos despachos de la Comisión ha mencionado el proyecto sancionado por la Cámara de Senadores.

Entonces, ¿cómo puede sostenerse que la sanción de la Cámara de Diputados es modificando el proyecto del Senado, cuando tomando los términos del señor senador por Tucumán, que nada pasa en una Cámara sin dejar su rastro, se ve que no ha dejado rastro alguno ese proyecto?

Pero, dice el señor senador, alterando un tanto los hechos: un proyecto no puede quedar en una cartera; va a la Cámara para que sea devuelto o revisado.

Eso sería lo natural y lo que debería suceder; pero no es lo que sucede, pues cientos de proyectos quedan en las comisiones.

El hecho mismo que se discute ahora tiene sus ejemplares en años anteriores, en el Congreso. Me recordaba hace poco un señor diputado que el año pasado o el anterior al pasado, mientras que el Senado había mandado un proyecto a la Cámara y de la Cámara de Diputados había venido otro sobre la misma materia al Senado, los dos proyectos aquellos, que estaban en tramitación, fueron suspendidos y se introdujo otro proyecto, que fué el sancionado.

Creo que fué un proyecto relativo a algo del Banco Nacional. No recuerdo bien. Pero estoy seguro del hecho, y los señores secretarios de la Cámara de Diputados y del Senado podrían informar que hay una gran cantidad de proyectos que están en las carteras de las comisiones, sobre asuntos que han sido tratados después en virtud de haberse presentado otros proyectos sobre la misma materia y convertidos después en leyes los últimos presentados, quedando los primitivos en cartera.

¿Por qué no ha podido suceder lo mismo con el proyecto del Senado, aprobando el decreto del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no ha podido suceder? ¡Si ha sucedido! Ahí está el proyecto en la cartera de la Comisión que no ha sido despachado, porque aquí está el despacho de la Comisión.

Sr. Igarzábal. — ¿Me permite?

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — ¡No, señor!

Sr. Igarzábal. — ¡Mejor! Acabaremos más pronto.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Bueno, le permito.

Sr. Igarzábal. — No, señor.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Aquí están los dos proyectos despachados por la Comisión de la Cámara de Diputados. Ninguno de ellos habla del proyecto del Senado; por consiguiente, no se ha tratado nada del enviado por él.

El proyecto es originario de la Cámara de Diputados, y es tan originario, que el despachado por el Senado se refiere a una ley para toda la República, mientras que el despachado por la Cámara de Diputados se refiere a una ley para la Capital y territorios nacionales; modificación fundamental, importantísima, que no puede ser desconocida.

Ese proyecto que ha sido presentado por la Comisión del Senado, ha sido presentado durante la discusión en la otra Cámara por doce diputados. El proyecto de los doce diputados es el que ha sido aprobado.

De manera, señor presidente, que creo que no cabe la menor duda respecto al origen del proyecto que está en discusión.

Lo que pasó en revisión del Senado no ha sido tocado por la Cámara de Diputados; lo que pasó en revisión fué el proyecto de ley aprobando un decreto y eso no ha sido mencionado.

Sr. Baibiene. — Si el señor ministro me permite.

Cuando se imprime el despacho de una Comisión y se pone a la orden del día, y ese des-

pacho es un proyecto de ley enmendando o substituyendo a otro proyecto de ley, que es lo que se pretende probar por la mayoría actual del Senado, que es el que tenemos en discusión, se imprimen los dos proyectos; y entiendo yo que en esas copias auténticas de la orden del día de la Cámara de Diputados no está impreso igualmente al lado del despacho de la Comisión el proyecto pasado en revisión por el Senado; y esto se hace constantemente.

Así, pues, entendía la Comisión, entendía la Cámara y entendía la mesa que mandaba hacer la impresión, que este despacho no era la modificación del proyecto que el Senado había remitido.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Es una observación de bastante fuerza la del señor senador. En efecto, así han pasado las cosas, como lo ha manifestado.

En presencia, pues, de estos documentos, no puede sostenerse lo que parecía tan claro al señor senador por Tucumán.

Pero, todavía no es bastante esto.

La comunicación de la Cámara de Diputados a que ha hecho referencia el señor senador por Buenos Aires, lo diré de una manera terminante: manda el proyecto en revisión; nunca ha entendido la Cámara que hubiera revisado un proyecto del Senado.

Las distancias que hay entre uno y otro proyecto, no permiten creer que sean modificaciones.

Entonces, señor, ¿qué va a resultar de esto: si la Cámara de Senadores se declara iniciadora del proyecto y la Cámara de Diputados iniciadora a su vez? Que no será ley. Dicen algunos: ¡mejor!; así continuará rigiendo la ley de la provincia de Buenos Aires. Debo manifestar a la Cámara que la ley de la provincia de Buenos Aires no está rigiendo actualmente en la capital de la República. No está rigiendo, porque se ha alterado fundamentalmente la constitución de la Comisión de Educación, que ha sufrido varias modificaciones. La última en la sanción hecha por la Cámara de Diputados.

Muchísimos de sus artículos están también derogados, y ese decreto no puede ser aplicado tampoco sino en la capital de la República.

Las diferencias entre los dos proyectos son fundamentales: uno se refiere a toda la República, otro a la Capital, otro a los territorios nacionales, y las modificaciones que los diversos decretos del Poder Ejecutivo han impreso a la ley de educación de la provincia, han hecho que en realidad esa ley no continúe rigiendo en la Capital, sino en el nombre.

¿Por qué la Cámara de Senadores, al pasar su proyecto, dijo que ponía en vigencia solamente el proyecto del Poder Ejecutivo, aceptando la ley de la provincia, mientras se dictara la ley de educación?

Esa cláusula indica claramente que la Cámara de Senadores en cualquier momento ha podido empezar a discutir la ley de educación, ya estando en trámite o no estando en trámite esa aprobación hecha por el Senado, puesto que esa misma ley le da cabida.

Eso es lo que ha hecho la Cámara de Diputados, en cuanto ella ha propuesto una ley de educación, no para la República, sino para la Capital y territorios nacionales.

Entonces, ¿qué dificultad hay en admitir que aquel proyecto es diferente del que sancionó el Senado?

El proyecto de ley enviado por la Cámara de Diputados es, en mi concepto, más completo que la ley de educación que rige en la provincia de Buenos Aires; las modificaciones, en algunos de sus artículos, están más de acuerdo con el adelanto que se ha hecho en esta materia en el mundo civilizado; el proyecto de la Cámara de Diputados consulta todas las necesidades del país; él no toca este punto, que es muy discutible: si el Congreso puede legislar, en materia de educación común, para toda la República; limita la acción de la ley a la Capital y territorios nacionales; mientras que la ley de educación, sancionada por esa aprobación del Senado, se refiere a toda la República.

Aquí no hay una cuestión insignificante, hay una cuestión de fondo. Quién sabe si las provincias aceptarán la imposición de esa ley para todas sus escuelas y no resistirán la aplicación de las cláusulas de esa ley, apoyándose en la misma Constitución, que les permite ejercer su facultad en esta materia, dentro de su territorio?

El proyecto de la Cámara de Diputados consulta, pues, esta susceptibilidad, diré. Es diferente del sancionado por el Senado y es mejor.

Hay un artículo en uno de los proyectos, en el proyecto de ley de educación sancionado por el Senado, que comparado con el equivalente de la Cámara de Diputados ha sido el núcleo de la discusión en aquella Cámara y es también, en el fondo, el núcleo de la discusión en ésta. Ese artículo es el relativo al mínimo de enseñanza que se ha de dar en las escuelas.

Esta cuestión ha sido debatida y lo es todavía en muchas partes del mundo, y puedo

afirmar que la resolución que ha tenido es favorable a la sanción hecha por la Cámara de Diputados.

¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado para con los ciudadanos, en materia de instrucción? Es reconocido que el Estado tiene obligación, cuando menos, de darles el mínimo de instrucción necesaria. Este mínimo de instrucción relativo a las escuelas, consta de una lista que todos los señores senadores pueden tener presente y que no necesito mencionar. Pero ¿figurará en ella la enseñanza religiosa, o no figurará? ¿El Estado está obligado a dar la enseñanza religiosa o no está obligado? Aquí está la cuestión, señor presidente.

La sanción de la Cámara de Diputados no niega que se dé la enseñanza religiosa en las escuelas; la permite; más bien la fomenta, puesto que pone al frente de esa enseñanza a los más autorizados para darla: a los sacerdotes.

No se puede decir, pues, que ese proyecto rehace la instrucción religiosa en las escuelas; pero, no reconoce tampoco que el Estado esté en la obligación de darla. ¿Por qué? Porque entonces la enseñanza no tendría un carácter universal y la que el Estado está obligado a dar debe tener carácter universal. ¿Por qué? Porque debe aplicarse a todos los individuos que habitan el suelo en el cual se ejerce la soberanía; y si ese suelo está habitado por individuos de diversas creencias religiosas, el hecho muestra la imposibilidad en que se encuentra el Estado de suministrar la enseñanza religiosa, adoptando una sola religión.

Vendría entonces la obligación por parte del Estado de enseñar todas las religiones o de no enseñar absolutamente ninguna.

Compárese esa con cualquier otra enseñanza, y se verá la diferencia. La geometría es una en el universo intelectual, la aritmética es una, la gramática general es una en el mundo, aunque varíe, según las diferentes lenguas, en detalles y no en el fondo. Todo lo que es materia de aprendizaje en las escuelas, en los colegios, en las universidades, tiene ese carácter universal.

Entonces el Estado se encuentra en la obligación, por su mismo carácter de suministrar lo que ha de servir al habitante de su suelo para su vida en todas partes.

Pero la especialidad, el carácter sui géneris de la religión, de las creencias, aparta la idea de que el Estado puede tener la obligación de enseñar esas creencias.

Por cualquier lado que se mire la cuestión se llega a esa solución. Un pueblo como el

nuestro, habitado por gente de diversas nacionalidades, de diverso idioma, de diversas creencias, de diverso culto, en una palabra, no puede exigir que el Estado se convierta en maestro de una sola de las creencias, porque eso es atacar la libertad de los otros; basta que permita esa enseñanza, basta que la tolere y la fomenta por los medios generales de fomento que tienen todos los ramos que sirven para la civilización del mundo, entre los cuales entra indudablemente la religión; pero si se ha de creer que el Estado se encuentra en la obligación de dar la enseñanza religiosa, se llega entonces a una porción de conclusiones que son contrarias a nuestro sistema de gobierno. Se hace contribuir, por ejemplo, a los protestantes, al sostén de escuelas donde se enseña la religión católica, y en los pueblos protestantes se haría contribuir a los católicos para sostener la enseñanza que se da en las escuelas de la religión protestante.

Más todavía: cuando nuestra Constitución dice — y este es un argumento que considero ilevantable — que todos los habitantes del país son aceptables en los empleos, sin más condición que la idoneidad, ha apartado con esta cláusula la obligación que tiene el Estado de hacer la enseñanza religiosa.

¿Cómo y por qué? Por una razón sencilla. Si el empleo de maestro de escuela no requiere, por la Constitución, sino la idoneidad, es evidente que por medio de leyes o reglamentos no se puede imponer una obligación más que no impone la Constitución.

La Constitución no ha dicho idoneidad católica, idoneidad protestante; idoneidad para la enseñanza es lo que se le exige al maestro.

Por consiguiente, si nosotros sancionáramos una ley estableciendo que la enseñanza debe ser necesariamente católica, protestante, en fin, de una religión dada, los individuos de diversas creencias no serían aptos para ejercer la magistratura, y los habríamos separado de ella contrariando las disposiciones de la Constitución.

Este argumento, que se ha repetido tantas veces, no ha sido una sola vez contestado.

Pediría al señor presidente me permitiera pasar a un cuarto intermedio.

Sr. Presidente. — Me parece que la Cámara no tendrá inconveniente.

Sr. Igarzábal. — El señor ministro pide descanso; debemos pasar a cuarto intermedio.

—Así se hace.

—Vueltos a sus asientos los señores senadores, dice el:

Sr. Presidente. — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor ministro.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Creo, señor presidente, que no ha de ser ésta una de las sesiones de que más se vanaglorie el Senado argentino.

En esta sesión no se ha permitido leer el proyecto que se discute; se iba a prescindir hasta del informe del miembro informante de la mayoría de la Comisión; se ha obligado al miembro informante a dar un informe en una sesión para la cual no estaba preparado, porque por declaraciones casi textuales de los señores senadores, se había creído que no se des-pacharía esta cuestión hoy.

Se ejerce, pues, una especie de presión con un fin que no se comprende, puesto que estas sanciones de la Cámara de Senadores deberían llevar el sello de la mayor llaneza, cordura y equidad; pero puesto que el Senado ha resuelto continuar la sesión, yo me creo en la obligación de concluir la exposición de los motivos que tengo para sostener el proyecto de la ley que ha venido de la Cámara de Diputados.

Sr. Gómez. — Antes de entrar al fondo de la cuestión, debo observar al señor ministro que está pendiente la moción para que se resuelva cuál de las Cámaras es iniciadora.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — He hablado ya sobre esa cuestión y he concluido lo que tenía que decir al respecto.

Creo que la cuestión se debate en general.

Sr. Avellaneda. — Tiene razón; está perfectamente dentro de la cuestión.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pienso, señor presidente, que toda cuestión que tiene un número de argumentos en pro y en contra, que es difícil aumentar estos argumentos, y cuando las discusiones se prolongan es forzoso repetirlos.

Por esta causa, muchos de los que hega serán los que fueron ya presentados en la Cámara de Diputados por mí o por algunos de los señores diputados.

Llego a un argumento que creo ha sido repetido.

Esta cuestión de la enseñanza religiosa en las escuelas, señor presidente, no ha sido nunca cuestión ni de creencias, ni cuestión de política, ni cuestión de moral, ha sido cuestión de mayorías y de minorías.

Cuando ella se ha discutido en Bélgica, en Holanda, en Francia, siempre se ha visto que las congregaciones que estaban en minoría

eran las que no querían que se enseñase la religión, y las que estaban en mayoría las que pretendían imponer la enseñanza religiosa. Resultando de este modo de gestionar el asunto, que en unas partes los llamados clericales o católicos y en otras los protestantes, han insistido unas veces los unos, porque no se enseñe la religión, y otras veces los otros por lo mismo, notándose que en ciertos momentos se ha producido lo siguiente: que mientras los católicos sostenían en una parte que no debía darse enseñanza religiosa en las escuelas, en otra parte sostenían que sí debía darse, ¿por qué? Por que era cuestión de número.

No necesito repetir los antecedentes de esta cuestión: son bien conocidos, los documentos, obran en todos los libros; los señores senadores pueden consultarlos, y por otra parte, han sido presentados abundantemente en la Cámara de Diputados.

Luego este debate se encamina al fondo de la cuestión, y aunque reviste la apariencia de una magnitud considerable, no tiene tanta como pudiera creerse.

En otras partes la cuestión se ha modificado profundamente, cuando se ha pensado en establecer una cláusula que no afecta el fondo de ella sino incidentalmente y en detalles que se le adhieren.

Hay muchos que sostienen que la enseñanza religiosa, en las condiciones en que lo pretende la sanción de la Cámara de Diputados, puede hacerse, con tal que haya un estipendio para los sacerdotes que hayan de dar esa enseñanza.

Entonces se dice: si el Estado costea la enseñanza, no hay inconveniente en aceptar el artículo que se propone — que es el mismo de la ley belga — y es necesario tener presente sus términos. Ese artículo dice lo siguiente: la enseñanza se hará por los ministros de los diversos cultos. Esto no quiere decir que no haya enseñanza religiosa. ¿Qué dificultad puede haber para que se dé la enseñanza religiosa por los ministros de los diversos cultos?

Los ministros de los diversos cultos no pueden invocar una gran tarea, no pueden invocar falta de tiempo, ni tampoco falta de estipendio, porque esto sería contra los principios de su propia moralidad.

¿Qué más quieren los partidarios de la enseñanza religiosa en las escuelas, que el que se nombren maestros de esa enseñanza a los que tienen la misión de darla?

Los mismos eclesiásticos, señor presidente, han reclamado la enseñanza religiosa como un

derecho, y hay documentos fehacientes que prueban que han negado la facultad de enseñar la doctrina a los que no son religiosos, por una razón muy sencilla: porque no los consideran incompetentes.

Entonces, ¿con qué derecho vendrían a rechazar lo que se propone en la sanción de la Cámara de Diputados, es decir, que la enseñanza religiosa se dé por los sacerdotes?

¿Qué más quieren?

Tendrán así la pureza de la doctrina, la enseñanza completa, la moralidad fundamental. Si la enseñanza religiosa es dada por los sacerdotes, puede garantizarse un éxito completo para la Iglesia, mientras que si es dada por los maestros de escuela — que esta es toda la cuestión — no puede garantizarse tal éxito.

Los maestros de escuela pueden ser miembros de diversas congregaciones, pueden tener diversos cultos. Un maestro de escuela a quien se le obliga a enseñar creencias, de las cuales no participa, las enseñará mal, con deficiencias o en una forma que haga más bien aborrecible esa enseñanza, que simpática, que es sin duda todo lo contrario de lo que pretenden los amantes de la enseñanza religiosa en las escuelas.

Cuando estos argumentos, presentados con ingenuidad, con verdadero desinterés, no hacen efecto, es necesario que haya alguna otra causa extraña a este propósito, que esté dando por resultado esa insistencia de los que sostienen la enseñanza religiosa en las escuelas.

La verdadera disidencia entre los que sostienen unas y otras ideas en las Cámaras argentinas, no existe sino en esto: en que unos quieren que la enseñanza religiosa se dé por los maestros, y otros quieren que se dé por los ministros de los diversos cultos.

Se ha dicho al tratar este mismo punto en Europa, que era recargar demasiado a los eclesiásticos imponiéndoles la obligación de concurrir a las escuelas a dar la enseñanza religiosa.

Un eclesiástico caracterizado contestaba diciendo: «¿Qué misión más grande, qué tarea más moral, qué propósito más sano que el de la enseñanza de la religión de los niños? Los eclesiásticos no pueden rehusarla bajo ningún pretexto. Y esa es la verdad, señor presidente; pero es una verdad de un género que no quiero calificar en este caso, pues he observado que cuando hay estipendio, la enseñanza religiosa es fácil. Entonces se la mira como tarea completamente compatible con las funciones de los eclesiásticos — no hablo de aquí, donde todavía no se ha puesto en práctica, que yo lo sepa a lo menos, sino de otras partes; pero estoy

seguro que si se estableciera alguna dotación para los profesores de la religión, los mismos sacerdotes que ahora no quieren aceptar la imposición de la enseñanza religiosa en las escuelas, la aceptarían de muy buen grado. Se ha dicho que las condiciones que se exigirían a los maestros para que fueran idóneos, dando una ley en los términos que se quiere, serían mayores que las que se exigen ahora; se ha dicho que se exigiría que fueran competentes en todas las materias de la enseñanza y además religiosos, buenos religiosos, sabios religiosos, porque los padres de la Iglesia, los eclesiásticos, sostienen que no puede darse la enseñanza de la religión en los términos a que aspira la Iglesia, sino por personas que conozcan a fondo los dogmas y la doctrina, y esto es exacto.

La religión enseñada por personas incompetentes, sería una falsificación de la religión y por lo tanto se obtendría un resultado contrario a los propósitos de la Iglesia.

¿Quién puede negar, pues, señor presidente, que el Estado no tiene derecho para exigir al que ha de dar la enseñanza general en las escuelas, más condiciones que las que dice la Constitución, y si eso es así, ¿cómo se pondría como programa una enseñanza religiosa que requiera una competencia especial?

Además de esto, señor presidente, se trata también en la ley de educación de otros puntos.

La enseñanza debe ser «obligatoria», la enseñanza debe ser «gratuita», debe ser «higiénica» debe ser «gradual».

Si la enseñanza debe ser obligatoria, esto viene a contradecir la idea de que debe ser religiosa, porque, ¿con qué derecho se obligaría al hijo de un protestante, por ejemplo, a aceptar los principios de una religión contraria a la suya?

Si la Nación cree que hay ventajas de salud pública, que hay beneficio para el Estado en imponer la obligación de la enseñanza, es decir, en imponer un minimum de instrucción, no puede aceptarse la enseñanza religiosa como obligación. Se llegaría a la tiranía por este medio, imponiéndose creencias iguales a todos los habitantes del país.

Que la educación tiene que ser obligatoria es indudable porque eso llena y garantiza los fines del Estado. Si se mira como una ventaja, lo que no es discutible ahora, que la instrucción propende al engrandecimiento de los pueblos, a su riqueza y a su bienestar, el Estado tiene la obligación de suministrar esa instrucción y no puede garantizar el éxito de ella, si no la hace obligatoria.

Es, pues, otro de los principios que se consagran en el proyecto de ley que la Cámara tiene a su discusión.

La enseñanza debe ser gratuita. No puede imponerse la obligación de aprender sin que venga la gratuidad de la enseñanza como consecuencia inmediata. Son cosas correlativas. ¿Qué resultaría si se impusiera la obligación de recibir un mínimum de educación y no hubiera medios fáciles para todos los niños de adquirir esa educación?

Creo, señor presidente, que estas ideas: enseñanza obligatoria, enseñanza gratuita e independiente de la religión, son cosas que se engranan perfectamente; más: necesaria y recíprocamente se sostienen. Creo que esa trinidad no puede ser destruída y que el sistema se disloca y se desorganiza, toda vez que se cambie cualquiera de esos elementos.

Hay otras materias que han sido encaradas en la discusión de la ley de educación y son las que se refieren a la moral y a la religión.

Se ha dicho: puede salvarse la dificultad aceptando que se enseñe moral, por ejemplo. En ninguna parte puede rechazarse semejante proposición. La enseñanza de la moral debe hacerse. Los principios de la moral son innatos en el hombre; los principios de la moral cristiana lo son también, porque este calificativo ha sido aplicado a cosas conocidas como morales desde tiempos anteriores a la existencia de la religión cristiana. El calificativo no las varía. El calificativo no quiere decir sino que parte de esos principios reconocidos como morales en el mundo han sido adoptados por la religión cristiana.

Entonces, el calificativo, no variando los principios de la moral, los deja con su carácter de principios universales de moral y por lo tanto civilizadores. No hay inconveniente, por tanto, en que se acepte una proposición semejante; y recuerdo que al discutirse una ley idéntica a la que se discute en esta Cámara, no sé si en Bélgica o en Holanda, al hacerse esta proposición, no fué un católico ni un cristiano el que se levantó para apoyarla; fué un israelita el que, aceptando la idea, declaró que sólo entendía por moral cristiana la moral que había servido para tantas civilizaciones: la moral universal.

La enseñanza de la moral independiente de la religión, es posible, señor presidente, porque los principios morales son abstractos, están en todas las cabezas humanas, y los principios de la religión se refieren a cosas concretas que afectan formas determinadas.

El culto tiene sus manifestaciones; estas manifestaciones son externas y no implica la necesidad de la práctica de estas manifestaciones externas el conocimiento de los principios morales. No hay duda de que para ciertas inteligencias la explicación de la doctrina será más difícil y en algunas circunstancias casi imposible sería hacer penetrar en entendimientos poco cultivados algunos principios abstractos. Desde este punto de vista la enseñanza de la moral en las escuelas será deficiente, pero esta dificultad se encuentra igualmente en todas las ciencias y por eso la enseñanza de las ciencias en la época moderna ha tomado de la experiencia todos los datos que sirven para hacer que la enseñanza sea más fácil.

La comparación con objetos materiales que se ponen a la vista de los niños es un elemento de introducción de las ideas abstractas y no habrá dificultad alguna para que las ideas morales sean asimiladas por el entendimiento de los niños en esa misma forma, refiriéndolas a cosas concretas, sin necesidad de que ellas sean relativas a un culto determinado. Pero no es esa la cuestión que se debate; este punto ha sido tocado incidentalmente y lo toco yo porque creo que no resiste a la discusión esta afirmación que se ha hecho alguna vez: es imposible la enseñanza de la moral sin la religión, y porque se ligan íntimamente también con la cuestión que estamos tratando.

La enseñanza debe ser graduada y debe ser higiénica. Indudablemente, los principios de la higiene son utilísimos, no solamente para el mantenimiento de la salud corporal, sino también para el mantenimiento de la salud intelectual: una buena sangre hace buenas ideas, se ha dicho, y yo también lo reputo así.

El sostenimiento del cuerpo en buenas condiciones ayuda poderosamente a la adquisición de ideas buenas y a la formación de estas ideas.

La enseñanza debe ser graduada; eso es de método; casi no debe estar en la ley; toda enseñanza forzosamente tiene que ser graduada, so pena de ser ineficaz.

La ley entra también a considerar otros puntos de suma importancia, que no pueden ser tratados con rapidez y sin pesarlos en toda su magnitud: si debe o no debe haber inspección, qué calidades deben tener estos inspectores, cuáles serán las rentas y, en fin, mil detalles que afectan el éxito que debe tener la aplicación de esta ley.

No he oído ni al miembro informante de la mayoría, que ha tenido sus razones para no emitir sus ideas a este respecto, ni al miembro

informante de la minoría, exposición alguna relativa a todos estos puntos, que considero de gran importancia.

En el proyecto de ley tampoco está indicada la razón de los artículos; allí están concretos los preceptos, diciendo lo que dicen y nada más; no consignan las razones que han tenido los autores del proyecto para poner esos artículos. Será, pues, de suma conveniencia, ya que la Cámara de Senadores quiere tratar este asunto en general con tanta precipitación, en mi opinión — la que emito salvando los respetos que me merece la Cámara — que al tratar estos puntos, no proceda del mismo modo en la discusión en particular.

Concluyo, señor presidente, pues la Cámara debe estar fatigada de esta discusión cuya terminación conoce, y comprendo que tal vez esta es una de las causas que influyen para que esté más fatigada.

Por lo tanto, y por haber concluido el bosquejo general de mi exposición a este respecto, he dicho.

Sr. Presidente. — Si no hay quién pida la palabra, se votará.

Sr. Bayo. — ¿Qué es lo que se va a votar?

Sr. Juárez Celman. — Creo que hay senadores en antesalas.

Sr. Presidente. — El señor senador D'Amico se ha retirado; está el señor senador Ortiz.

—Entra y ocupa su asiento el señor senador Ortiz.

Sr. Presidente. — Se va a votar si está suficientemente discutido el punto.

—Así se hace y resulta afirmativa de 14 votos.

Sr. Presidente. — Se va a votar si se aprueba el dictamen de la Comisión en mayoría.

—Se vota y resulta negativa.

Sr. Cambaceres. — Hago indicación para que conste mi voto en el acta por el despacho de la mayoría.

Sr. Presidente. — Así se hará.

Se va a votar si se aprueba el despacho de la Comisión en minoría.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. del Valle. — Me parece que ahora podríamos levantar la sesión. Hago moción en ese sentido.

Sr. Igarzábal. — Lo que yo quiero proponer es lo siguiente: que se resuelva que el señor presidente, al comunicar a la Cámara de Diputados el resultado que han tenido las modificaciones que introdujo esa Cámara en el proyecto del Senado, le manifieste que el Senado no ha aceptado las modificaciones que le ha remitido con la fecha en que ha venido el proyecto.

Sr. del Valle. — Pido la palabra.

Sr. Juárez Celman. — ¡Si falta tratar una por una todas las modificaciones!

Sr. del Valle. — Pido la palabra. Se va a dar una mala inteligencia...

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador del Valle.

Sr. del Valle. — Iba a observar que hemos votado en general el proyecto y tenemos ahora que votar modificación por modificación.

Sr. Igarzábal. — Si está rechazado en general. Está aprobado el proyecto de la minoría. No tiene derecho de volver ningún senador...

Sr. del Valle. — Pido la palabra.

Sr. Igarzábal. — ¡No permito que se me interrumpa, porque es imposible que se me convenza de semejante cosa!

Hago moción para que la Cámara resuelva que el presidente, al comunicar a la Cámara de Diputados, le diga lo siguiente: que el Senado ha resuelto no aceptar las modificaciones introducidas a su proyecto — de tal fecha — y que le ha remitido con la fecha con que la Cámara de Diputados le ha remitido su proyecto.

Sr. del Valle. — Pido la palabra sobre la moción del señor senador.

Señor presidente: las opiniones que han prevalecido en el seno de la Cámara han sido las de los señores senadores que sostienen que el Senado es Cámara iniciadora. Me parece que sobre eso estamos de acuerdo, a juzgar por la votación de la Cámara, porque yo no me levanto nunca contra la sanción de la Cámara.

Ahora bien; cuando una Cámara modifica el proyecto de la Cámara originaria, el asunto vuelve a la consideración de la Cámara originaria y las modificaciones introducidas por la Cámara revisora pueden ser aceptadas en todo o en parte, después de discutidas una por una.

No necesito para demostrarlo, más que leer esta prescripción de nuestro reglamento: «Cuando, como Cámara iniciadora, vuelva al Senado un proyecto revisado por la Cámara de Diputados y en el cual éste hubiese desechado o modificado uno o más artículos, puede el Senado

insistir en ellos, o en alguno o algunos de ellos, en la totalidad de relación o en parte de ella.» Lo que quiere decir, señor, que esta es materia de dos deliberaciones.

Yo les observaría a los señores senadores que teniendo ya la sanción en general, tienen la ventaja de haber hecho declarar...

Sr. Igarzábal. — No tenemos esas ventajas; tenemos lo siguiente: que el Senado ha rechazado en general las reformas propuestas por la Cámara de Diputados y, como si eso no bastara porque no se necesitaba otra votación, se ha entrado a considerar el proyecto de la minoría y lo ha sancionado.

De manera que nada está en discusión ni en general ni en particular.

Sr. del Valle. — Continúo.

Las modificaciones se discuten una por una; hay sesenta, cien, doscientos casos entre los precedentes de la Cámara. Esto no se puede negar sin negar lo que es claro como la luz.

Todos los días discutimos una por una las modificaciones que introduce la Cámara revisora en los proyectos de la Cámara iniciadora...

Sr. Igarzábal. — Vea el señor senador que va a quedar constancia en las actas y traducciones taquigráficas, que el señor senador por Buenos Aires, tan avezado, tan...

Sr. del Valle. — Me basta con que diga: tan recto.

Sr. Igarzábal. — Sí, recto; porque hago justicia a los sentimientos del señor senador. Ha sostenido el señor senador que después de haber rechazado en general el proyecto y de haberse considerado el de la minoría y aceptándose, se ha de tratar el proyecto de la mayoría, que ha sido rechazado en general.

Sr. del Valle. — Permitame observarle: desde el momento que la Cámara ha resuelto que es Cámara iniciadora, no puede rechazar en general, porque un proyecto no se puede rechazar en general sin producir como consecuencia que no es materia del debate en las sesiones del mismo año. Si tal cosa hubiera tenido lugar, tampoco podría haber sido discutido el proyecto de la minoría. Así es que esto no es absolutamente regular.

Señor: cuando un proyecto va de una Cámara a la otra, ésta lo discute en general; pero cuando un proyecto es aceptado en general por las dos Cámaras y viene a discutirse las enmiendas, no hay rechazo en general; hay rechazo de las enmiendas introducidas por la Cámara.

Y no es sólo el reglamento de la Cámara; es la Constitución que dice esto, y pido que se

lea el artículo sobre la formación y sanción de las leyes, por el que el señor senador va a ver que lo que se discutió y se discute en el seno de esta Cámara como iniciadora, son las enmiendas introducidas por la Cámara revisora.

Se ha discutido en general, y el señor presidente — apelo a su propio testimonio — al poner este asunto a la deliberación de la Cámara, declaró que estaba en discusión en general; pero se quiere llevar a la violencia hasta el último extremo, y yo pido que se lea la Constitución, ya que el reglamento de la Cámara no tiene bastante autoridad; pido que se lea la Constitución.

Sr. Secretario. — (*leyendo*): Artículo 71. — Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuere adicionado y corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen...

Sr. del Valle. — Basta, señor secretario.

Está clarísimo, pues, lo que dice la Constitución: «si sólo fuese adicionado o corregido por la Cámara revisora» — que es el caso, pues según la resolución del Senado, somos nosotros Cámara iniciadora y ha sido adicionado y corregido el proyecto por la Cámara de Diputados, — «volverá a la de su origen».

Sr. Alvear. — No ha sido corregido sino substituido.

Sr. del Valle. — Entonces quiere decir que el procedimiento que los señores senadores quieren establecer como ventajoso para ellos, es un procedimiento que no está en la Constitución. Esta dice que los proyectos pueden ser corregidos o adicionados, y no habla de este nuevo término en que se fundan los señores senadores, de proyectos substituidos; es decir, los señores senadores, para sostener sus decisiones, se colocan fuera de la Constitución, y yo no estoy obligado a seguirlos en ese terreno.

Sr. Alvear. — Es la opinión del señor senador.

Sr. del Valle. — Es la opinión del texto de la Constitución; y los señores senadores no pueden invertirlo y hacerle decir «substituido» cuando dice «adicional o corregido».

El mismo artículo de la Constitución dice que si en la Cámara revisora se aprobasen las correcciones o adiciones por mayoría absoluta, pasará el proyecto al Poder Ejecutivo, y que si las adiciones o correcciones fuesen desechadas, volverá por segunda vez a la Cámara revisora. Y el artículo de nuestro reglamento, previendo el caso de las correcciones o adiciones, dice lo siguiente: que pueden aceptarse unas y rechazarse otras. No es posible, pues,

que las prescripciones de la Constitución y del reglamento se cumplan, si se han de entender las votaciones del Senado como las entiende el señor senador a quien contesto.

Me parece que, estando en la situación en que nos encontramos, habiendo declarado esta Cámara por su votación que es Cámara iniciadora, habiéndose aprobado en general el proyecto de la minoría, habiéndose desechado el de la mayoría, y admitido como base de la discusión el despacho de la minoría, podemos levantar la sesión y continuarla más adelante.

Sr. Iriondo. — El señor senador por Buenos Aires hace oposición indudablemente fundándose en principios consignados en la Constitución y en las prácticas parlamentarias, pero no hace una exacta apreciación de los hechos.

En primer lugar, no se ha votado ni ha estado sujeta a votación la cuestión respecto a cuál es Cámara iniciadora.

Esta cuestión ha venido como incidente de la discusión. Por consiguiente, no es exacto que haya una resolución del Senado declarándose Cámara iniciadora. Al contrario...

Sr. Gómez. — Si me permite le diré que el despacho de la minoría de la Comisión es que la Cámara insista en su primitiva sanción. No podía, pues, sancionar esto sin declararse iniciadora la Cámara.

Sr. del Valle. — «Que insista en su primitiva sanción», dice la minoría de la Comisión.

Sr. Igarzábal. — ¡Indudablemente así es!

Sr. Iriondo. — No negaba este hecho, puesto que yo había declarado que apoyaba la moción del señor senador por San Juan; pero esto es independiente de la cuestión que ha sido rechazada. Y, valiéndome de los mismos principios sentados por el señor senador por Buenos Aires y de los términos de la Constitución, digo que no se vuelve sobre un proyecto ni puede volverse cuando es rechazado en general. Y hay una circunstancia especialísima en este caso, señor presidente, y es que justamente quienes han estado sosteniendo en este incidente del debate que la Cámara de Diputados era la iniciadora, pretenden tener el derecho de adicionar o corregir el proyecto cuando él ha sido rechazado en general: son precisamente los que creen que la Cámara de Diputados es iniciadora, que sostienen que puede considerarse en particular el proyecto una vez rechazado.

Sr. Igarzábal. — Mi moción termina el incidente de una manera completa.

La Cámara se ha pronunciado sobre el proyecto recomendado por la mayoría de la Comisión. En el mismo sentido se ha pronunciado

ya por el proyecto aconsejado por la minoría de la Comisión, es decir, conserva su sanción del año 1881.

Todo lo que hay que hacer, pues, por haberse puesto en cuestión si esta era Cámara iniciadora por no ser muy explícito el mensaje de la Cámara de Diputados con que remitió el proyecto que ha recomendado la mayoría de la Comisión, es lo que yo he propuesto, que el señor presidente sea autorizado por la Cámara para expresar en la comunicación que le pase a la Cámara de Diputados el sentimiento del Senado de que esta irregularidad se haya producido.

Propongo esto para evitar mayores dificultades.

Nadie había soñado seguramente con que esta dificultad iba a ocurrir, nadie se iba a imaginar que después de rechazado en general el proyecto, había de haber quien sostuviese que se discutiera en particular.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — ¿Cuál proyecto?

Sr. del Valle. — Voy a hablar para hacer una rectificación.

Los señores senadores no pueden levantarse contra a resolución del Senado dictada a su propio pedido.

Los señores senadores han votado el proyecto de la minoría de la Comisión que dice: «que la Cámara insista en su primitiva sanción», lo que coloca claramente en este terreno a la Cámara de Senadores. Cámara iniciadora, no puede entenderse que haya rechazado en general su proyecto, porque esto probaría que no habría ley. Tanto no se puede entender que hay rechazo general del asunto, que a renglón seguido se ha puesto a votación el despacho de la minoría, lo que implica decir que no se ha rechazado en general el proyecto sobre ley de educación.

Estas dificultades en que nos encontramos, señor presidente, provienen de la manera como se han presentado los despachos y cómo se han traído al debate. Desde el momento en que la minoría de la Comisión declaraba que el Senado debía insistir en su sanción anterior, implicaba decir que era la Cámara originaria; y estos incidentes que debieron haber sido resueltos por una votación, para determinar los ulteriores procedimientos en la sanción de la ley, no han sido evitados confundiendo y englobándose en la discusión del proyecto en general este punto que era incidental, previo, de procedimientos.

El señor presidente mismo, no teniendo resolución de la Cámara respecto a este punto,

ha procedido como es de orden en estos casos, sometiendo el asunto a la discusión en general; pero desde que nos encontramos con esta dificultad, desde que se ha declarado que la Cámara de Senadores es Cámara iniciadora, puesto que se ha aprobado el proyecto de la minoría de la Comisión y se ha declarado por ésta que el Senado es Cámara iniciadora, me parece que no puede negarse el derecho con que nosotros llamamos a la discusión una por una las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, y que tenemos que pedir que se voten una por una esas modificaciones, porque el reglamento del Senado establece perfectamente que podrán aceptarse unas o desecharse todas; y los señores senadores no tienen el derecho de decir: las hemos de desechar o aceptar englobadas todas.

Me parece que esto es tan claro y convincente que no creo necesario continuar en el uso de la palabra.

Si los señores senadores insisten en seguir sus procedimientos, será únicamente porque son la mayoría.

Así es que por última vez, pido que, para simplificar el debate, se resuelva por una votación, si debemos discutir en particular las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. Creo que esas enmiendas no pueden rechazarse en general y que tienen que votarse en particular.

Sr. Igarzábal. — Pido que se vote mi moción.

Sr. del Valle. — La mía es previa.

Sr. Igarzábal. — La mía es previa.

Sr. del Valle. — ¡Cómo va a ser previa, cuando el señor senador da por supuesto en general lo que es materia de la discusión en particular y cuando yo lo discuto! Es previo que la Cámara declare por una votación si debe discutir en particular las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Se votara la moción del

señor senador por Buenos Aires después que el señor senador por San Juan haya concluido de redactar su moción.

Sr. Igarzábal. — Mi moción es: que el señor presidente comunique a la Cámara de Diputados que el Senado ha tenido a bien no aceptar las modificaciones que le comunicó en tal fecha...

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — La Cámara no le ha comunicado eso.

Sr. Igarzábal. — ... haber introducido al proyecto remitido por el Senado en tal fecha.

Sr. del Valle. — Pido ahora la votación de mi moción: que el Senado declare por una votación que, no obstante el voto que acaba de dar aprobando en general el proyecto de la minoría, hay lugar a la discusión de cada una de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.

Sr. Igarzábal. — Mi indicación es para que se eiten dos fechas: la fecha del mensaje de la Cámara de Diputados al remitir al Senado el proyecto que se ha rechazado, y la fecha del mensaje del Senado al enviar en revisión a la Cámara de Diputados el proyecto original, en 1881.

Sr. Presidente. — Se redactará en Secretaría.

Sr. Igarzábal. — Perfectamente.

—Se vota la moción del señor senador por Buenos Aires y se rechaza por negativa de 12 contra 14.

Sr. Barros. — Parece que no es necesario ya votar la indicación del señor senador por San Juan.

Sr. Igarzábal. — Debe votarse.

—Se vota la moción del señor senador por San Juan y se aprueba por 14 votos contra 12.

—En seguida se levanta la sesión siendo las 8 y 15 de la noche.